

LEY NÚMERO 615 ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 16 DE MARZO DE 2021.

Ley publicada en el Número Extraordinario de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el jueves 8 de febrero de 2018.

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, febrero 6 de 2018

Oficio número 24/2018

Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes sabed:

Que la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme la siguiente Ley para su promulgación y publicación:

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo.— Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción I y 38 de la Constitución Política local; 18 fracción I y 47 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo; y en nombre del pueblo, expide la siguiente:

L E Y NÚMERO 615

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y observancia general, y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO [N. DE E. CON SUS INCISOS], G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

Artículo 2. El Poder Judicial se deposita en los órganos que señalan la Constitución Política del Estado y esta Ley, y se regirá por los principios de excelencia, disciplina, integridad, rendición de cuentas, eficacia, austeridad, economía, transparencia, profesionalismo, independencia, honestidad, eficiencia, imparcialidad, legalidad y objetividad. Estará integrado por los órganos siguientes:

A. Jurisdiccionales:

I. El Tribunal Superior de Justicia;

II. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje;

III. Los Juzgados de Primera Instancia;

a) De materia mixta;

b) Especializados en materia familiar;

c) Civiles;

d) De procesos y procedimientos penales orales, que se integrarán por:

a. Jueces de Control;

b. Tribunales de enjuiciamiento, que se compondrán por un Juez; y

c. Jueces ejecutores de sentencia.

e) Especializados para adolescentes, que se compondrán por:

a. El Juez de garantías;

b. El Juez de juicio; y

c. El Juez de ejecución de medidas sancionadoras.

IV. Los Juzgados en Materia Laboral;

V. Los demás especializados, cuya competencia determine el Consejo de la Judicatura, en atención a las necesidades del servicio y a la disponibilidad presupuestal; y

VI. Los Juzgados Municipales.

B. Administrativos:

I. La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, que se auxiliará por:

- a) La Coordinación de Comunicación Social;
- b) La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información;
- c) La Unidad de Género; y
- d) La Dirección de Compilación y Sistematización de Criterios.

II. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, mismo que se apoyará en:

- a) La Visitaduría Judicial;
- b) La Escuela Judicial del Estado;
- c) La Dirección General de Administración;
- d) La Dirección de Control y Estadística;
- e) La Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos;
- f) El Comité Técnico y de Administración del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia;
- g) La Contraloría del Poder Judicial; y
- h) Dirección de Asuntos Jurídicos.

Además de los órganos referidos en los Apartados A y B de este artículo, el Poder Judicial contará con un organismo público descentralizado denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz.

Artículo 3. El Poder Judicial del Estado tendrá las atribuciones siguientes:

I. Garantizar la supremacía y el control de la Constitución Política del Estado mediante su interpretación y, en su caso, anulación de las leyes o decretos contrarios a ella;

II. Proteger, promover, respetar y salvaguardar los derechos humanos y todo lo demás previsto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

III. Interpretar y aplicar las leyes del fuero común y las federales en jurisdicción concurrente o auxiliar;

(REFORMADA, G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

IV. Conocer y resolver a través de los juzgados en materia laboral, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al Apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y de igual forma, los conflictos laborales de las universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables; asimismo, por conducto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores; entre la administración pública estatal y municipal con sus empleados; así como entre los organismos autónomos del Estado y sus empleados, en los términos que fijen las leyes locales;

V. Tramitar y resolver, mediante los procedimientos que señale la ley, los asuntos de los adolescentes a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito;

VI. Dictar las medidas procedentes para que la administración de justicia sea pronta, completa e imparcial;

VII. Conocer del juicio político como órgano de sentencia, cuando los servidores públicos incurran en actos u omisiones que constituyan perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho;

VIII. Conocer, en los términos que fije la Ley respectiva, de los juicios de responsabilidad civil derivada del ejercicio del cargo, que se instauren a instancia de parte agraviada o de sus causahabientes, en contra de magistrados, consejeros de la Judicatura, Fiscal General, secretario de Despacho y demás servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial;

IX. Determinar y publicar los precedentes obligatorios, sustentados en cinco resoluciones consecutivas en el mismo sentido en la materia, que vinculen a todas las autoridades del Estado, en los términos que señalen las leyes;

X. Resolver los conflictos de competencia que surjan entre los Tribunales y Juzgados;

XI. Adscribir a los magistrados a las Salas o Tribunales correspondientes y llamar a los que deban integrar Sala o Tribunal;

XII. Administrar con autonomía su presupuesto, el cual se manejará bajo una sola unidad administrativa, y que destinará, en renglones separados, los recursos para los Tribunales, Juzgados y órganos que lo integran;

XIII. Rendir cuenta anualmente al Congreso del Estado acerca del ejercicio de su presupuesto, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y las leyes de la materia;

XIV. Atender las solicitudes del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en términos de las leyes aplicables;

XV. Coordinar, dirigir y administrar las órdenes y medidas de protección y los informes sobre las circunstancias en que se dé la ejecución de éstas, al Banco Estatal de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres;

XVI. Crear sistemas de registro para incorporar indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y del acceso de éstas a la justicia;

XVII. Informar sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género; y

XVIII. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

La sede oficial del Poder Judicial es el municipio de Xalapa Enríquez y, para el mejor desempeño de la función jurisdiccional, sus órganos podrán contar con Salas o Juzgados en los distintos municipios, distritos y regiones del Estado, en los términos que fije la normativa atinente.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Artículo 4. Las magistradas y los magistrados del Poder Judicial serán nombrados en términos de lo previsto por la Constitución Política del Estado, atendiendo el principio de paridad de género; durarán en su cargo diez años y podrán ser ratificados para un segundo período de cinco años, previo dictamen emitido por el Consejo de la Judicatura, y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, salvo que durante ese lapso se ausenten de manera definitiva, dejen de cumplir con algunos de los requisitos para ser magistrado o se actualicen los supuestos previstos para el retiro forzoso.

Los requisitos e impedimentos para ser magistrado serán los señalados en la Constitución Política del Estado.

En ningún caso podrá haber dos o más magistrados que sean parientes consanguíneos dentro del cuarto grado. Si hubiere magistrados vinculados por parentesco de afinidad serán asignados a Tribunales distintos.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Artículo 5. Las magistradas y los magistrados del Poder Judicial, antes de ejercer su cargo, protestarán ante el Congreso del Estado o, en los recesos de éste, ante la Diputación Permanente, en la forma siguiente:

Presidente: "¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado del Poder Judicial que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, así como las leyes que de ambas emanen, y cumplir cabalmente las obligaciones de su encargo?"

Magistrado: "Sí protesto".

Presidente: "Si no lo hiciere así, que esta Representación Popular se lo demande".

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Artículo 6. Las magistradas y los magistrados tendrán las atribuciones siguientes:

I. Concurrir, participar y votar, cuando corresponda, en las sesiones a las que sean convocados por los presidentes de los órganos a los que pertenezcan;

II. Formular los proyectos de resolución de los expedientes que les sean turnados para tal efecto;

III. Discutir y votar los proyectos de resolución que sean sometidos a su consideración en las sesiones de sus correspondientes órganos;

IV. Ordenar los engroses de los fallos aprobados, cuando sean designados para tales efectos;

V. Someter a la consideración de sus respectivos órganos, cuando proceda, la acumulación de las impugnaciones, así como la procedencia de la conexidad, en los términos de las leyes aplicables;

(REFORMADA, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2018)

VI. Participar en los programas de actualización de la Escuela Judicial del Estado;

VII. Participar, previo consentimiento expreso, en los programas de visitas a los Tribunales, Juzgados y demás órganos del Poder Judicial, implementados por el Consejo de la Judicatura;

VIII. Informar a su presidente de sus ausencias temporales no mayores de cinco días; y

IX. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Artículo 7. Los jueces y juezas, con excepción de los municipales, serán nombrados por el Consejo de la Judicatura mediante concurso de oposición, mismo que deberá incorporar el principio de paridad de género; durarán en su cargo cinco años y podrán ser ratificados las veces que sean necesarias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Consejo de la Judicatura, siempre que su función haya sido desempeñada con probidad, eficiencia y profesionalismo y que su expediente no tenga notas de demérito.

De tener un cuadernillo administrativo sancionador en trámite, se suspenderá el proceso de ratificación hasta en tanto se resuelva en definitiva.

Artículo 8. El Consejo de la Judicatura diseñará el procedimiento de ratificación, en el que se respetará el derecho de audiencia, con observancia de los principios señalados en el artículo 2 de esta Ley, para lo cual deberá emitir el Reglamento respectivo, a efecto de implementar los mecanismos de actualización, evaluación y certificación profesional.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Artículo 9. Las juezas y jueces municipales serán nombrados por el Consejo de la Judicatura, de una terna presentada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Este procedimiento deberá atender al principio de paridad de género. Durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados por un período igual, las veces que sean necesarias, con los mismos requisitos y condiciones que los de Primera Instancia.

Artículo 10. La retribución que corresponda a los servidores públicos del Poder Judicial será la que señale el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del Estado, y no podrá ser disminuida durante el tiempo de su encargo.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO I

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SECCIÓN PRIMERA

Integración y funcionamiento

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Artículo 11. El Tribunal Superior de Justicia se integrará con treinta y tres magistradas y magistrados electos bajo el principio de paridad de género, y funcionará en Pleno y en Salas. Quedan comprendidos dentro de éstos, la magistrada o magistrado presidente, las magistradas o magistrados visitantes y aquellos que integran las Salas en Materia Civil, Penal, de Responsabilidad Juvenil, Constitucional y las Salas en Materia de Familia, en términos del artículo 18 de esta Ley.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, excepcionalmente, podrá disponer de un número mayor o menor de magistrados o magistradas o Salas para la integración del Tribunal Superior de Justicia, siempre que exista una causa justificada y de acuerdo a las necesidades del servicio.

(REFORMADO, G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020)

Artículo 12. El Pleno se compondrá por la presidenta o presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien no integrará Sala, y por las presidentas o presidentes de cada una de sus Salas colegiadas.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Pleno deberá reunir, cuando menos, las dos terceras partes de sus integrantes, entre los que deberá estar presente su presidenta o presidente.

Artículo 13. Las sesiones del Pleno serán públicas, con excepción de los casos en que la ley, la moral o el interés público exijan que sean privadas.

Artículo 14. Las sesiones ordinarias del Pleno se efectuarán cuando sean convocadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, según lo acordado en la primera sesión del mes de diciembre de cada año. Las sesiones extraordinarias se efectuarán cuando lo considere necesario el propio presidente o lo solicite un mínimo de tres presidentes de Sala.

Artículo 15. El presidente del Tribunal Superior de Justicia convocará, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, a sesiones ordinarias del Pleno, anexando la propuesta de orden del día; y a sesiones extraordinarias, cuando lo estime urgente, sin sujetarse al plazo mencionado.

Artículo 16. Las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los presentes, quienes no podrán abstenerse de votar, sino cuando tengan impedimento legal o cuando no hubiesen estado presentes durante la discusión del asunto de que se trate. Cuando existiere empate, el presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá voto de calidad.

SECCIÓN SEGUNDA

Atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia

Artículo 17. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia tendrá las atribuciones siguientes:

I. Conocer y resolver las controversias constitucionales que surjan entre:

- a) Dos o más municipios;
- b) Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o el Legislativo; y
- c) El Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, o de los municipios, y la resolución del Pleno del Tribunal Superior de Justicia las declare inconstitucionales, ésta tendrá efectos generales cuando hubiese sido aprobada por las dos terceras partes de sus miembros, y surtirá efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

II. Conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o decretos que se consideren contrarios a la Constitución Política del Estado, y que se ejerciten dentro de los treinta días siguientes a su promulgación y publicación por:

- a) El Gobernador del Estado; o
- b) Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso.

Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales cuando hubiesen sido aprobadas por las dos terceras partes de los miembros del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, y surtirán efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, sin poder aplicarse retroactivamente, excepto cuando se trate de asuntos del orden penal y en beneficio del inculpado;

III. Conocer y resolver las acciones por omisión legislativa, cuando se considere que el Congreso no ha aprobado alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte el debido cumplimiento de la Constitución Política del Estado, que interpongan:

- a) El Gobernador del Estado; o
- b) Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos.

La resolución sobre la omisión legislativa surtirá sus efectos a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado; en la misma se determinará un plazo que comprenda dos períodos de sesiones ordinarias del Congreso del Estado, para que éste expida la ley o decreto de que trate la omisión. Si transcurrido este plazo

no se atendiere la resolución, el Tribunal Superior de Justicia dictará las bases a que deberán sujetarse las autoridades, en tanto se expide dicha Ley o decreto;

IV. Erigirse en jurado de sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, para conocer en juicio político, cuando los servidores públicos a que se refiere dicho precepto incurran en actos u omisiones que constituyan perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho;

V. Conocer, en los términos que fije la ley respectiva, de los juicios de responsabilidad civil derivada del ejercicio del cargo, que se instauren a instancia de parte agraviada o de sus causahabientes en contra de magistrados, consejeros de la Judicatura, el Fiscal General, secretario de despacho y demás servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial;

VI. Resolver sobre la responsabilidad administrativa de los consejeros de la Judicatura;

VII. Hacer del conocimiento del Fiscal General los hechos que pudieren ser constitutivos de delitos, atribuidos a los servidores públicos de la administración de justicia;

VIII. Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, con base en los anteproyectos que le remitan las Salas que lo integran;

IX. Conocer, para los efectos legales correspondientes, de la cuenta pública documentada del ejercicio fiscal del año anterior;

X. Atender las observaciones y recomendaciones que le formule el Órgano de Fiscalización Superior, respecto del ejercicio de su presupuesto, en los términos que establezca la ley;

XI. Aprobar el Reglamento del Tribunal Superior de Justicia;

XII. Resolver, de oficio o por denuncia, las contradicciones entre precedentes obligatorios emitidos por las Salas;

XIII. Resolver los conflictos de competencia que surjan entre las Salas del Tribunal Superior de Justicia, entre éstas y los Juzgados o de los Juzgados entre sí;

XIV. Resolver los conflictos de competencia que se presenten entre los distintos Tribunales o Salas que conforman el Poder Judicial y entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y los Juzgados;

XV. Establecer, en su respectivo ámbito y en los términos de esta Ley, los precedentes obligatorios del Pleno o de las Salas y ordenar su publicación, debidamente compilada y sistematizada, por conducto del presidente del Tribunal;

XVI. Aprobar la presentación de iniciativas de leyes o decretos ante el Congreso del Estado, en todo lo relacionado con la organización y funcionamiento de la impartición y la administración de justicia;

XVII. Elegir a su presidente en términos de esta Ley;

XVIII. Adscribir a los magistrados a los Tribunales o a las Salas del Tribunal Superior de Justicia y llamar a los que deban integrar Sala o Tribunal;

XIX. A fin de distribuir las cargas de trabajo y cumplir los fines de la fracción IX del artículo 56 de la Constitución Política del Estado, asignar competencias adicionales a las Salas del Tribunal;

XX. Conceder los permisos o licencias que soliciten los magistrados o consejeros, en los términos señalados por esta Ley;

XXI. Nombrar, mediante votación secreta, a dos magistrados para que formen parte del Consejo de la Judicatura, en términos de lo dispuesto por el artículo 87 de la presente Ley;

XXII. Asignar el haber de retiro de los magistrados del Poder Judicial que así lo soliciten, el que surtirá sus efectos a partir del día siguiente a su cese de funciones.

(REFORMADO, G.O. 3 DE OCTUBRE DE 2018)

El haber de retiro será de hasta treinta por ciento de las percepciones que reciba un magistrado en activo sin incluir bonos, vales especiales o servicios personales, de acuerdo al dictamen de la comisión instructora será otorgado únicamente durante un periodo idéntico al que fungió como Magistrado;

(REFORMADA, G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

XXIII. En materia de asuntos indígenas, resolver conforme a los principios de reserva de jurisdicción indígena, relaciones de coordinación, igualdad, no discriminación y suplencia de la deficiencia de la queja, de los casos que le sean sometidos, en términos de la ley respectiva;

(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

XXIV. Conocer y resolver sobre los conflictos de competencia a que se refiere la fracción I del artículo 705 Bis de la Ley Federal del Trabajo;

(ADICIONADA, G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

XXV. Conocer y resolver la recusación a que se refiere el artículo 709-A de la Ley Federal del Trabajo conforme al procedimiento establecido en dicho ordenamiento; y

(ADICIONADA [N. DE E. REUBICADA], G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

XXVI. Conocer de los demás asuntos que expresamente establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

SECCIÓN TERCERA

De las Salas

Artículo 18. El Tribunal Superior de Justicia contará con Salas especializadas en las materias Constitucional, Penal, Civil, Familiar y de Responsabilidad Juvenil en el número que se requiera para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Estará integrada cada una de ellas, con excepción de la Sala de Responsabilidad Juvenil que será unitaria, por tres magistrados, de entre los que se elegirá a su presidente, el cual fungirá por un año, con la posibilidad de ser reelegido de forma inmediata por una sola ocasión.

Artículo 19. Las Salas colegiadas del Tribunal Superior de Justicia, para la resolución de los asuntos de su respectiva competencia, funcionarán de la manera siguiente:

I. Deberán estar presentes todos sus integrantes y sus resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. Las sesiones de las Salas serán públicas, salvo los casos en que la ley, la moral o el interés público exijan que sean privadas; y

II. Emitirán su resolución, previa exposición y discusión del caso entre sus integrantes, con base en el proyecto que presente el magistrado ponente. Cuando un magistrado disienta de la mayoría, formulará voto particular, el cual se insertará al final de la sentencia aprobada, siempre y cuando se presente antes de la firma de ésta.

Cuando el proyecto del magistrado ponente no fuere aprobado en sus términos, uno de los vocales redactará la resolución que corresponda, quedando el proyecto del magistrado ponente como voto particular.

Artículo 20. Las excusas o impedimentos que para conocer de un asunto presenten los magistrados serán calificados y resueltos de inmediato por el órgano de su adscripción, y se comunicarán a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia para proveer lo conducente a la suplencia, en la forma y términos previstos por esta Ley y el Reglamento.

Artículo 21. Las Salas tendrán competencia para:

- I. Establecer, en su ámbito, los precedentes obligatorios, en los términos que señala esta Ley;
- II. Ordenar la práctica de diligencias para ilustrar su criterio y mejor proveer, en los casos y términos previstos por las leyes;
- III. Girar mandamientos, en el ámbito de su competencia, a los Juzgados del estado, encomendándoles la realización de alguna diligencia;
- IV. Requerir, en el ámbito de su competencia, a las autoridades estatales o municipales, organismos, entidades y particulares, según corresponda, los informes o documentos necesarios para la sustanciación de los expedientes cuando, instaurado un juicio, tengan relación con los puntos controvertidos, en los casos y términos previstos por las leyes;
- V. Elaborar anualmente su anteproyecto de presupuesto y enviarlo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, a fin de que éste lo someta al acuerdo del Pleno;
- VI. Proponer al presidente del Tribunal Superior de Justicia el nombramiento y, en su caso, remoción del secretario de Acuerdos, secretario de Estudio y Cuenta, actuarios y demás personal;
- VII. Proponer, en el ámbito de su competencia, las reformas al Reglamento del Tribunal Superior de Justicia que estimen necesarias;
- VIII. Conocer de las recusaciones y excusas del magistrado o magistrados de las Salas, respecto a los asuntos que les sean turnados bajo el sistema aleatorio;
- IX. Conocer de la calificación de las recusaciones y excusas de su respectivo secretario;
- X. Remitir al Consejo de la Judicatura, por conducto de su presidente, los datos necesarios para la formación de la estadística de la administración de justicia y los demás que aquél les solicite; y
- XI. Conocer de los demás asuntos que establezcan la Constitución Política y las leyes del Estado.

Artículo 22. Los presidentes de Sala tendrán las atribuciones siguientes:

- I. Representar legalmente a la Sala;
- II. Autorizar, en unión con el secretario de Acuerdos, las listas de acuerdos;
- III. Despachar la correspondencia oficial de la Sala;

- IV. Conducir las sesiones de la Sala y vigilar que se cumplan sus resoluciones;
- V. Mantener el orden en las sesiones; al efecto, cuando los asistentes no guarden la compostura debida, podrán ordenar el desalojo de los presentes y continuar la sesión en privado;
- VI. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias para el adecuado funcionamiento de la Sala y las medidas disciplinarias que dicte el Pleno del Tribunal;
- VII. Informar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de las irregularidades en que incurra el personal adscrito a la Sala;
- VIII. Adoptar las medidas de naturaleza inmediata o urgente, necesarias para el desahogo de los asuntos de la competencia de la Sala;
- IX. Aplicar las medidas de correcciones disciplinarias a los promoventes, litigantes o particulares que en sus escritos falten al respeto al presidente o magistrados de Sala;
- X. Dar cuenta al Consejo de la Judicatura, para los efectos correspondientes, de las irregularidades cometidas por servidores públicos del Poder Judicial, que advirtieren al sustanciar los asuntos de su competencia;
- XI. Informar al presidente del Tribunal Superior de Justicia, para su publicación, de las resoluciones y precedentes obligatorios dictados por la Sala correspondiente;
- XII. Rendir al presidente del Tribunal Superior de Justicia, en la última semana de octubre de cada año, el informe anual de las actividades de la Sala, para su inclusión en el informe que aquél presente al Pleno de dicho Tribunal;
- XIII. Proponer, previo acuerdo de la Sala de que se trate y en su respectivo ámbito de competencia, reformas al Reglamento del Tribunal Superior de Justicia; y
- XIV. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

Artículo 23. La Sala Constitucional tendrá competencia para:

I. Conocer y resolver, en los términos de la normativa aplicable, del Juicio de Protección de Derechos Humanos, por actos o normas de carácter general que conculquen derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, provenientes de:

a) El Congreso del Estado;

b) El Gobernador del Estado; y

c) Los titulares de las dependencias o entidades de la administración pública estatal, municipal y de los organismos autónomos del Estado;

II. Conocer y resolver, en Instancia única, de las impugnaciones planteadas contra las resoluciones de los fiscales sobre la reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal y las resoluciones de sobreseimiento, que dicten los jueces con motivo del desistimiento de la acción que formule el Ministerio Público, con excepción de lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales;

III. Sustanciar los procedimientos en materia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y las acciones por omisión legislativa, y formular los proyectos de resolución definitiva que se sometan al Pleno del Tribunal Superior de Justicia;

IV. Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones formuladas por las demás Salas, Tribunales y jueces del Estado, cuando tengan duda sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley local, en el proceso o procedimiento sobre el cual tengan conocimiento. Las peticiones tendrán efectos suspensivos y deberán ser desahogadas en un plazo no mayor de treinta días naturales, en los términos que disponga la ley. La Sala desechará de plano las peticiones, cuando se advirtiere de manera manifiesta su frivolidad o intrascendencia. Los particulares no podrán hacer uso de esta facultad;

V. En materia de asuntos indígenas, conocer, sustanciar y resolver conforme a los principios de reserva de jurisdicción indígena, relaciones de coordinación, igualdad, no discriminación y suplencia de la deficiencia de la queja, de los casos que le sean sometidos, en términos de la ley respectiva; y

VI. Conocer de los asuntos que establezcan la Constitución Política Local y demás normativa aplicable, así como de los que le asigne el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, incluyendo los asuntos en materia penal.

Artículo 24. Las Salas Penales serán competentes para conocer y resolver de los asuntos siguientes:

I. En última Instancia, de los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de Primera Instancia en asuntos del orden penal, así como las determinaciones relativas a incidentes civiles que surjan en los procesos penales;

II. De conflictos de competencia que se susciten, en la materia, entre los diversos Juzgados del Estado;

III. De la calificación de las excusas y recusaciones de los jueces de Primera Instancia en Materia Penal;

IV. Del narcomenudeo, en los términos establecidos por la Ley; y

V. Los demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

Artículo 25. Las Salas Civiles serán competentes para conocer y resolver de los asuntos siguientes:

I. De los recursos de apelación que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de Primera Instancia en Materia Civil y mercantil en jurisdicción concurrente;

II. Del recurso de queja y del juicio de responsabilidad civil, de acuerdo con lo que disponga la ley;

III. De los conflictos de competencia que se susciten, o que sean planteados en vía de excepción, entre los diversos Juzgados del Estado;

IV. De la calificación de las excusas y recusaciones de los jueces de Primera Instancia en la materia;

V. De los recursos en materia de extinción de dominio, en términos de la ley respectiva; y

VI. Los demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

Artículo 26. Las Salas en Materia de Familia serán competentes para conocer y resolver de los asuntos siguientes:

I. De los recursos de apelación y queja que les correspondan y que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas en materia familiar;

II. De las excusas y recusaciones de los jueces en Materia de Familia;

III. De las competencias que se susciten en materia familiar entre los Juzgados del mismo orden y de los demás que determinen las leyes; y

IV. Los demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

Artículo 27. La Sala de Responsabilidad Juvenil tendrá la facultad de resolver los recursos de apelación, apelación especial y revisión, en los términos previstos en la Ley de Responsabilidad Juvenil para el Estado.

Artículo 28. Los presidentes de las Salas de los Tribunales del Poder Judicial serán suplidos, en sus faltas temporales que no excedan de diez días consecutivos, por el magistrado que ellos mismos designen, pero si excedieren de ese término, la designación del magistrado presidente interino la hará la Sala a la que pertenezcan.

Tratándose del magistrado adscrito a la Sala de Responsabilidad Juvenil, la designación de sustitución la hará el presidente del Tribunal Superior de Justicia.

CAPÍTULO III (SIC)

DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

SECCIÓN PRIMERA

Integración y funcionamiento

Artículo 29. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje se compondrá por cuatro magistrados, uno de los cuales formará parte del Consejo de la Judicatura sin integrar el Pleno de ese Tribunal.

El Tribunal contará con un secretario de Acuerdos y los de Estudio y Cuenta que permita el presupuesto, mismos que serán nombrados conforme a lo dispuesto por esta Ley.

En su funcionamiento se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el artículo 19 de esta Ley.

SECCIÓN SEGUNDA

Atribuciones

Artículo 30. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tendrá su sede oficial en el municipio de Xalapa Enríquez y competencia para:

I. Establecer, en su respectivo ámbito, los precedentes obligatorios en los términos de esta Ley y ordenar su publicación, debidamente compilada y sistematizada, por conducto de su presidente;

II. Resolver las controversias laborales que se susciten entre los Poderes Judicial o Legislativo y sus trabajadores; entre la administración pública estatal o municipal con sus empleados; y entre los organismos autónomos del Estado y sus trabajadores;

III. Efectuar y, en su caso, cancelar el registro de las organizaciones de trabajadores de las dependencias centralizadas y entidades de la administración pública estatal o municipal, así como las de los organismos autónomos del Estado;

IV. Conocer de las controversias que se susciten entre los sindicatos y sus agremiados;

V. Conocer de las controversias sindicales e intersindicales;

VI. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo, reglamentos de escalafón, reglamentos de las comisiones mixtas de seguridad e higiene y de los estatutos de los sindicatos de los Poderes Judicial o Legislativo; de las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal; y de los organismos autónomos del Estado;

VII. Conocer de las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y las instituciones de seguridad social estatales, respecto de las prestaciones en materia de pensiones civiles;

VIII. Calificar las excusas o impedimentos de los magistrados del Tribunal;

IX. Aprobar el Reglamento del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y remitirlo, para su publicación, al presidente del Tribunal Superior de Justicia;

X. Dar cuenta al Consejo de la Judicatura de las irregularidades de que tenga conocimiento, cometidas por los secretario, actuarios y demás servidores públicos del Tribunal, que afecten el buen funcionamiento del mismo; y

XI. Conocer de los demás asuntos que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

Artículo 31. Los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje no serán recusables, pero deberán excusarse de conocer en los juicios en que intervengan, cuando se encuentren comprendidos dentro de los supuestos que señala esta Ley.

SECCIÓN TERCERA

De su Presidente

Artículo 32. El presidente del Tribunal será elegido cada tres años por los magistrados del mismo, durante la primera semana de diciembre del año de que se trate, y podrá ser reelegido por una sola vez.

Artículo 33. El presidente del Tribunal tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Ejercer la representación legal del Tribunal;
- II. Presidir las sesiones del Tribunal;
- III. Designar, por riguroso turno, al magistrado ponente en los asuntos competencia del Tribunal;
- IV. Dictar los Acuerdos de trámite necesarios para la sustanciación de los asuntos competencia del Tribunal;
- V. Presentar al Pleno del Tribunal, para su aprobación, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos;
- VI. Informar al presidente del Tribunal Superior de Justicia, para su publicación, de las resoluciones y precedentes obligatorios dictados por el Tribunal;
- VII. Proponer al Consejo de la Judicatura el nombramiento del secretario de Acuerdos, de los secretarios de Estudio y Cuenta, actuarios y demás personal del Tribunal;
- VIII. Proponer reformas al Reglamento del Tribunal;
- IX. Presentar ante el Consejo de la Judicatura y los magistrados que integran el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en la tercera semana de noviembre de cada año, un informe por escrito de las actividades realizadas por el órgano jurisdiccional que preside. Este informe se remitirá al Congreso del Estado;
- X. Conocer y someter a la consideración del Tribunal las excusas o impedimentos de sus magistrados;
- XI. Elaborar y someter a la consideración de los magistrados que integran el Tribunal el anteproyecto anual de presupuesto, para su aprobación y remisión al presidente del Consejo de la Judicatura, a más tardar el catorce de septiembre de cada año; y
- XII. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

Artículo 34. El presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en caso de ausencias temporales que no excedan de diez días consecutivos, será suplido por el magistrado que él designe; si fuere por un tiempo mayor, la elección del magistrado presidente interino la hará el Pleno del Tribunal.

De presentarse la solicitud de una licencia sin goce de sueldo, corresponderá al Congreso del Estado otorgarla hasta por ciento veinte días.

SECCIÓN CUARTA

De la Procuraduría para la Defensa de los Trabajadores

Artículo 35. El Tribunal contará con una Procuraduría para la Defensa de los Trabajadores, que desempeñará las funciones siguientes:

I. Representar o asesorar, en forma gratuita, a los trabajadores y a los sindicatos, siempre que así lo soliciten, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las disposiciones contenidas en la ley de la materia; y

II. Proporcionar a las partes interesadas, en forma gratuita, soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas.

Artículo 36. El procurador para la Defensa de los Trabajadores será nombrado por el Consejo de la Judicatura, a propuesta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y deberá satisfacer los requisitos siguientes:

I. Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en Derecho o su equivalente y cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

Artículo 37. El Reglamento del Tribunal determinará, conforme a las atribuciones que expresamente señalen las leyes del Estado, la organización y el funcionamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Trabajadores.

CAPÍTULO IV

DE LOS JUZGADOS

SECCIÓN PRIMERA

De los Juzgados de Primera Instancia y Especializados

Artículo 38. Los Juzgados de Primera Instancia y Especializados residirán en los lugares que acuerde el Consejo de la Judicatura y se integrarán por los jueces, secretario, actuarios y el personal necesario para su funcionamiento, en los términos que disponga la normativa aplicable y que fije el presupuesto.

El Consejo de la Judicatura, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, creará los Juzgados de Primera Instancia o Especializados necesarios para el buen funcionamiento de la administración de justicia; y podrá establecer la competencia territorial y por materia de acuerdo a los requerimientos.

Artículo 39. Para ser juez de Primera Instancia o especializado se requiere:

I. Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en Derecho o su equivalente y cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

(REFORMADA, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2018)

IV. Acreditar el curso implementado por la Escuela Judicial del Estado, en las materias respectivas;

V. Participar en el examen de oposición que se convoque al efecto y aprobarlo en los términos que señale la convocatoria respectiva; y

VI. Ser de reconocido prestigio profesional, honradez y capacidad.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

Artículo 40. En la entidad federativa habrá el número necesario de Juzgados de Primera Instancia, en Materia Laboral o Especializados que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para el buen funcionamiento de la administración de justicia, quien fijará la competencia territorial y por materia de dichos órganos jurisdiccionales, conforme a la disponibilidad presupuestal.

Por cuanto a la competencia en razón de territorio, el Consejo de la Judicatura podrá establecer que un órgano jurisdiccional la tenga respecto a uno o más distritos judiciales o respecto de cualquier otra demarcación que sea necesaria para el buen

funcionamiento de la administración de justicia, debiendo publicar tal determinación en la Gaceta Oficial del Estado.

En materia penal deberá existir en cada distrito judicial cuando menos un Juzgado de proceso y procedimiento penal oral, quien conocerá de toda clase de delitos del fuero común, sea cual fuere la pena que les corresponda.

En los casos que se establezca la competencia para que un Juzgado conozca sobre un distrito judicial, deberá denominarse Juzgado mixto el órgano jurisdiccional si únicamente existe un solo Juzgado de Primera Instancia en dicho distrito, el cual conocerán de toda clase de asuntos cuya naturaleza corresponda a las materias civil, familiar y mercantil. Cuando haya dos o más Juzgados de Primera Instancia con igual competencia mixta, se designarán por número ordinal, según lo determine el Consejo de la Judicatura.

Artículo 41. Los jueces de Primera Instancia tendrán las atribuciones siguientes:

I. Conocer de los asuntos civiles, familiares, de extinción de dominio, mercantiles en jurisdicción concurrente, así como aquellos que señalen las leyes;

II. Vigilar el trámite de los negocios judiciales, a efecto de que las resoluciones sean debidamente fundadas y motivadas;

III. Cuidar de que se reciban en autos, con toda veracidad y de acuerdo con el procedimiento respectivo, las pruebas que deban rendirse;

IV. Dar cuenta al Consejo de la Judicatura de las irregularidades de que tengan conocimiento, cometidas por el personal a sus órdenes, con el fin de que las labores se desarrollen con toda normalidad y eficacia, ajustándose a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

V. Rendir con toda exactitud los informes que el Consejo de la Judicatura les solicite;

VI. Remitir al Consejo de la Judicatura la noticia mensual, dentro de los cinco primeros días, de las labores judiciales y enviarle copia de las resoluciones que pongan fin a los asuntos civiles, familiares, mercantiles en jurisdicción concurrente, así como aquellos comunicados que señalen las leyes; e informar de los asuntos que se radiquen y de los que se encuentren pendientes de resolver;

VII. Dar cuenta al Consejo de la Judicatura de las deficiencias o irregularidades que observen en la actuación de los fiscales, defensores de oficio y demás auxiliares de la administración de justicia;

VIII. Practicar las diligencias que les encomienden los Tribunales del Poder Judicial y cumplimentar, previo examen de su legalidad, los exhortos que les dirijan los jueces de Primera Instancia del Estado y demás Tribunales de la República;

IX. Visitar mensualmente las cárceles de sus respectivos distritos y remitir al Consejo de la Judicatura, dentro de los primeros cinco días de cada mes, una noticia del movimiento habido de causas y reos en sus Juzgados durante el mes anterior, sin perjuicio de otros informes especiales que se les soliciten;

X. Ordenar la ejecución de las sentencias y demás resoluciones que pronuncien y causen estado;

XI. Solicitar directamente y por escrito, cuando sea necesario, el auxilio de la fuerza pública a quienes tengan el mando de la misma. Será causa de responsabilidad para quienes tengan el mando de la fuerza pública no proporcionar oportunamente el auxilio requerido;

XII. Implementar los sistemas de informática necesarios para el seguimiento y control de los asuntos puestos a su consideración, previamente autorizados por el Consejo de la Judicatura y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal;

XIII. Dictar sentencias empleando un lenguaje incluyente y con perspectiva de género; y

XIV. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

Artículo 42. Para conocer de los asuntos relativos a la materia familiar, en los términos que señalen las leyes del Estado, los Juzgados especializados se organizarán, funcionarán y tendrán la competencia territorial que determine el Consejo de la Judicatura; contarán con el personal administrativo necesario para la adecuada sustanciación y resolución de los asuntos puestos a su consideración y podrán auxiliarse de los Centros de Convivencia Familiar establecidos por el Consejo de la Judicatura.

De igual forma, podrán auxiliarse de instituciones públicas que les permitan contar con los elementos necesarios para salvaguardar el interés superior de los menores.

Artículo 43. Los Juzgados especializados para adolescentes se integrarán por:

I. El Juez de garantía;

II. El Juez de juicio; y

III. El Juez de ejecución de medidas sancionadoras.

Artículo 44. En los Juzgados especializados para adolescentes, corresponde:

I. A los jueces de garantía:

- a) Resolver sobre la legalidad de la detención en los casos de consignación con detenido;
- b) Recabar la declaración preparatoria del adolescente a quien se le impute la comisión de un hecho tipificado como ilícito;
- c) Aprobar los acuerdos preparatorios del daño o perjuicio;
- d) Resolver sobre la suspensión del proceso a prueba;
- e) Resolver sobre la vinculación a proceso del adolescente a quien se le atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito;
- f) Resolver sobre el otorgamiento de medidas cautelares;
- g) Resolver sobre la admisión de las pruebas, en los términos que señale la ley de la materia;
- h) Decretar la suspensión del proceso por arreglo conciliatorio en los casos en que proceda conforme a la ley;
- i) Vigilar que el adolescente cuente con defensor especializado en la materia; y
- j) Ejercer las demás atribuciones que las leyes les otorguen.

II. A los jueces de juicio:

- a) Dirigir el juicio conforme a los lineamientos que establezca la ley de la materia;
- b) Dictar las medidas correspondientes; y
- c) Las demás atribuciones que establezca la normativa aplicable.

III. A los jueces de ejecución de medidas sancionadoras:

- a) Controlar que la ejecución de toda medida sancionadora se aplique de conformidad con la sentencia definitiva que la impuso, salvaguardando la legalidad, derechos y garantías que asistan al sentenciado durante la ejecución de la misma;
- b) Controlar el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las medidas sancionadoras;
- c) Ordenar el cese de la medida sancionadora, una vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia;

d) Atender las solicitudes que hagan los adolescentes sancionados, sus padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, la custodia o quien tenga derecho a ello o, en su caso, el adulto joven, o su defensor, y determinar lo que corresponda;

e) Visitar los centros de cumplimiento de las medidas sancionadoras del adolescente, por lo menos dos veces al mes; y

f) Las demás atribuciones que establezca la normativa aplicable.

Artículo 45. El personal que integre los Juzgados especializados deberá cumplir los requisitos siguientes:

I. Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en Derecho o su equivalente cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada, y contar al menos con dos años de experiencia en el ejercicio de la profesión;

III. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y

(REFORMADA, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2018)

IV. Tener conocimientos sobre la materia de que se trate, lo que se acreditará con la constancia expedida por la Escuela Judicial del Estado.

Artículo 46. Los jueces de Primera Instancia tendrán bajo su cuidado y estricta responsabilidad los bienes muebles que les pongan a disposición, así como los valores que se les consignen o depositen.

(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

SECCIÓN PRIMERA BIS

De los Juzgados en Materia Laboral

(ADICIONADO, G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

Artículo 46. Bis. Los juzgados en materia laboral conocerán y resolverán, los conflictos que se susciten entre los trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre estos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas, conforme al apartado A, del artículo 123, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo y de igual forma, los conflictos laborales de la (sic) universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía en el Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables; ello en términos de lo que determine el Consejo de la judicatura, y demás disposiciones legales aplicables.

(ADICIONADO, G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

Artículo 46 Ter. Los juzgados laborales se integrarán por una persona titular que se denominará Jueza o Juez, el número de secretarios y demás personal que el Consejo de la Judicatura determine y el presupuesto permita.

SECCIÓN SEGUNDA

De los Órganos Jurisdiccionales de Procesos y Procedimientos Penales Orales

Artículo 47. La función jurisdiccional en materia penal se ejerce por:

- I. Jueces de control;
- II. Tribunal de enjuiciamiento;
- III. Jueces ejecutores de sentencia; y
- IV. Tribunal de alzada. Los magistrados y jueces tendrán fe pública en el ejercicio de su función.

Artículo 48. Los jueces o Tribunales en materia penal conocerán de:

- I. Control: Desde la etapa de investigación que requiera intervención judicial hasta el dictado del auto de apertura a juicio;
- II. Enjuiciamiento: De la apertura a juicio hasta el dictado de la sentencia;
- III. Ejecución: Para hacer cumplir, sustituir, modificar o declarar extintas las penas o medidas de seguridad conforme a lo establecido en las leyes aplicables; y
- IV. Las Salas en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, para resolver los medios de impugnación y demás asuntos previstos en esta Ley.

Artículo 49. Para el adecuado ejercicio de su función, los órganos jurisdiccionales de procesos y procedimientos penales orales contarán, entre otros, con:

- I. Administrador judicial de causa; y
- II. Auxiliar de Sala.

El Consejo de la Judicatura podrá designar a diverso personal auxiliar del Juzgado, conforme a la disponibilidad presupuestal y las necesidades del servicio.

Artículo 50. Los jueces de control tendrán las atribuciones siguientes:

- I. Conocer del control de detención;
- II. Resolver sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control judicial, en los términos de las disposiciones legales aplicables;
- III. Resolver los acuerdos sobre la facultad de abstención de investigar, archivo temporal, no ejercicio y desistimiento de la acción penal;
- IV. Resolver las impugnaciones en contra de las decisiones definitivas del Fiscal que autoricen o nieguen la aplicación de un criterio de oportunidad;
- V. Resolver sobre las cuestiones planteadas por las partes, relacionadas con los datos y medios de prueba obtenidos lícitamente;
- VI. Resolver los problemas planteados, relacionados con las soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso;
- VII. Resolver sobre la vinculación o no vinculación a proceso de los imputados;
- VIII. Recibir la prueba anticipada;
- IX. Presidir la audiencia intermedia, aprobando los acuerdos probatorios a los que hayan llegado las partes y luego del análisis de los medios de prueba ofrecidos ordenarán se excluyan algunos medios de prueba impertinentes que no tengan relación con el objeto de la investigación;
- X. Resolver las controversias entre las partes, comprendidas desde la etapa de investigación hasta el auto de apertura a juicio; y
- XI. Las demás que establezcan el Código Nacional de Procedimientos Penales y la normativa aplicable.

Artículo 51. Los jueces que integran los Tribunales de enjuiciamiento tendrán las atribuciones siguientes:

- I. Presidir la audiencia de juicio oral y resolver todas las cuestiones planteadas por las partes en el juicio, relacionadas con la acusación del Fiscal y la defensa del imputado;

- II. Resolver de inmediato las cuestiones incidentales que así lo exija su naturaleza;
- III. Representar al órgano jurisdiccional en el juicio de garantía;
- IV. Dirigir el debate y vigilar la disciplina en la audiencia; y
- V. Las demás que le señalen el Código Nacional de Procedimientos Penales y la normativa aplicable.

Artículo 52. Los jueces de ejecución tendrán las atribuciones siguientes:

- I. Informar anualmente, o cuando se les requiera, de las actividades que realicen, específicamente estadísticas de los casos resueltos y de los que se encuentren en trámite;
- II. Brindar orientación a los internos que obtengan beneficios o tratamiento que otorga la Ley, sobre las obligaciones y deberes a su cargo;
- III. Ordenar la realización de estudios técnicos jurídicos de los internos sancionados con pena privativa de libertad por sentencia ejecutoriada;
- IV. Formar expediente particular a cada interno, desde que se dicte sentencia ejecutoria, para darle seguimiento hasta que esté en aptitud de obtener beneficios o tratamiento que concede la ley, integrado con la copia de la sentencia ejecutoriada que le impuso la pena privativa de libertad y demás documentos, dictámenes y datos que sean necesarios para resolver sobre aquéllos; y
- V. Las demás que señale la normativa correspondiente.

Artículo 53. Para ser administrador judicial de causa se requiere:

- I. Ser mexicano;
- II. Tener más de veinticinco años de edad;
- III. Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en Derecho o su equivalente cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada, con conocimientos en el sistema de justicia penal acusatorio adversarial; y
- IV. No haber sido condenado por delito doloso.

Artículo 54. El administrador judicial de causa tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Dirigir las labores administrativas, para que las audiencias que presidan los jueces de Control, los Tribunales de Enjuiciamiento y los jueces de Ejecución se desarrollen adecuadamente;

- II. Realizar las actividades administrativas que sean necesarias, para la buena marcha del despacho y las audiencias que presidan los jueces de Control, los Tribunales de Enjuiciamiento y los jueces de Ejecución;
- III. Supervisar las funciones del personal que tenga adscrito y a su cargo y evaluar su desempeño;
- IV. Distribuir el despacho judicial y las audiencias a los jueces de Control, Tribunales de Enjuiciamiento y jueces de Ejecución, cuando proceda, conforme a un procedimiento objetivo, aleatorio y general, procurando una correcta programación de las audiencias de acuerdo al sistema informático;
- V. Establecer el orden de guardias de los jueces de Control;
- VI. Verificar que se cumpla con el abastecimiento de material de trabajo a las áreas de su competencia, de conformidad a lo requerido mensualmente por el juez Coordinador de los jueces de Control;
- VII. Implementar y dar cumplimiento a las políticas y directrices generales que dicte el presidente del Consejo de la Judicatura, en materia de selección de personal, evaluación, administración de recursos materiales y humanos, de diseño y análisis de información estadística y demás;
- VIII. Informar las necesidades presupuestarias anuales y turnarlas a la unidad administrativa del Consejo de la Judicatura;
- IX. Dar cuenta semestralmente al presidente del Consejo de la Judicatura del Estado que guarda la gestión administrativa del nuevo sistema de justicia penal;
- X. Tener bajo su custodia las Salas de audiencia, así como los bienes asignados a las mismas, debiendo poner de inmediato en conocimiento del presidente del Consejo, cualquier deterioro que sufran;
- XI. Custodiar los bienes y valores que se encuentren a disposición de los jueces de Control y de los Tribunales de Enjuiciamiento con motivo de la tramitación de los asuntos sometidos a su conocimiento;
- XII. Entregar y recibir bajo inventario los bienes y valores a que se refieren las fracciones X y XI de este artículo;
- XIII. Asignar, conforme a las disposiciones que expida el presidente del Consejo de la Judicatura, a uno o varios jueces de Control, a las unidades judiciales donde deban ejercer su jurisdicción;

XIV. Convocar a las partes para que concurran a audiencia en aquellos casos en que la ley establezca que la autoridad Judicial deba convocar a una audiencia y no sea necesaria una valoración judicial previa, respecto a la necesidad de celebrarla; y

XV. Las demás que determinen las disposiciones legales.

Artículo 55. Para ser auxiliar de Sala deberán satisfacerse los mismos requisitos que para ser administrador judicial de causa.

Artículo 56. El auxiliar de Sala tendrá las atribuciones siguientes:

I. Agendar las solicitudes de audiencia que le sean turnadas por el administrador judicial de causa;

II. Vigilar que existan las condiciones físicas idóneas de la Sala y del equipo para llevar a cabo la audiencia respectiva;

III. Asistir al juez en el desarrollo de las audiencias en que éste intervenga;

IV. Recibir, resguardar y registrar los soportes físicos y documentales, producto de la celebración de la audiencia de las causas penales respectivas;

V. Proporcionar al administrador judicial de causa los reportes estadísticos de las audiencias y demás actos procedimentales en que intervenga;

VI. Publicar las audiencias en los medios correspondientes;

VII. Apoyar al juez en la expedición de las copias autenticadas que soliciten las partes en el proceso, referentes a las constancias procesales, así como de los archivos digitales de su Juzgado; y

VIII. Las demás que la normativa aplicable establezca. En los Juzgados de Proceso y Procedimiento Oral que no cuenten con un administrador judicial de Causa, el auxiliar de Sala suplirá sus funciones en los términos del artículo 38 de esta Ley.

SECCIÓN TERCERA

De los Juzgados Municipales

Artículo 57. Los Juzgados Municipales residirán en las cabeceras de los municipios o en el lugar que acuerde el Consejo de la Judicatura, el que fijará su número en los términos que disponga la normativa aplicable y fije el presupuesto.

Artículo 58. Los jueces municipales actuarán con un secretario y, en su caso, podrán habilitar con ese carácter a alguno de los empleados; a falta de éstos, en los asuntos urgentes actuarán con dos testigos de asistencia.

Artículo 59. Para ser juez municipal se requiere:

(REFORMADA, G.O. 3 DE OCTUBRE DE 2018)

I. Poseer, al día del nombramiento, título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y

II. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de más de un año de prisión.

Artículo 60. Los jueces municipales tendrán las atribuciones siguientes:

I. Conocer de los asuntos civiles, mercantiles en jurisdicción concurrente y penales, en los términos que fijen las Leyes;

II. Practicar las diligencias que, por medio de despacho o exhorto, les encomienden los Tribunales, Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Menores, Juzgados Municipales del Estado, Tribunales federales y los de otras entidades federativas;

III. Certificar la autenticidad de las firmas de los convenios, contratos privados y documentos que contengan designación de beneficiarios, otorgados por trabajadores sindicalizados de instituciones oficiales, cerciorándose por sí mismos o por medio de testigos de conocimiento de que son los interesados los que intervienen.

Al efecto, los jueces municipales llevarán un libro en el que asentarán constancia de las certificaciones en que intervengan, una a continuación de la otra; el número progresivo que le corresponda y por orden de fechas; constancia que los interesados también firmarán o en la que imprimirán sus huellas, en su caso, en presencia del juez, asistido del secretario, y en los documentos originales deberán imprimir el sello en todas las fojas, rubricarlas, firmarlas y asentar el número progresivo, haciendo constar el número de fojas, al igual que en las copias que cotejen con sus originales.

Cuando los otorgantes no sepan firmar, deberán imprimir su huella y firmará otra persona debidamente identificada, a su ruego o encargo.

La certificación de documentos distintos a los precisados en esta fracción dará lugar a que el Consejo de la Judicatura inicie, de manera oficiosa en contra del juez y secretario responsables, el procedimiento administrativo sancionador;

IV. Remitir al Consejo de la Judicatura, dentro de los tres primeros días de cada mes, la noticia del movimiento de asuntos civiles, mercantiles y penales;

V. Sustituir en el trámite de los asuntos, en su distrito judicial, a los jueces municipales, menores y de Primera Instancia, cuando éstos se excusen; en los dos últimos casos, serán asesorados por el juez de Primera Instancia del distrito judicial más próximo; y

VI. Las demás que establezcan la Constitución y las Leyes del Estado.

Artículo 61. Los jueces municipales, en vía de jurisdicción voluntaria, sólo conocerán de las diligencias de apeo y deslinde, así como de las informaciones testimoniales que se promuevan para acreditar la construcción de inmuebles ubicados en la jurisdicción en que ejerzan sus funciones y las demás que les señalen las leyes; asimismo, conocerán de las informaciones ad perpetuam.

Artículo 62. En las cabeceras municipales que no lo fueren a la vez del distrito judicial, el juez municipal efectuará, por lo menos cada quince días, visitas a los centros de prisión preventiva.

Artículo 63. Los secretarios de Juzgados Municipales deberán ser mexicanos y preferentemente licenciados en Derecho.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES

Artículo 64. Los órganos jurisdiccionales contarán con los secretario (sic) de Acuerdos, de Estudio y Cuenta, actuarios y demás personal que requieran para su funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y el Reglamento respectivo, y lo permita el presupuesto.

Artículo 65. Los jueces de Primera Instancia, en los casos de impedimento por excusa o recusación, se sustituirán:

I. Cuando haya más de uno con igual competencia, recíprocamente, atendiendo en su caso a la naturaleza del asunto; y

II. A falta de unos y otros, por el juez de Primera Instancia cuya competencia territorial resulte más próxima a la del juzgador que sustituye.

Artículo 66. Los jueces de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones, no podrán ausentarse de la demarcación territorial donde ejerzan competencia, excepto cuando exista causa legal, justificada o de fuerza mayor; en estos dos últimos casos, con la aprobación del Consejo de la Judicatura.

Artículo 67. Los secretarios encargados del despacho podrán acordar y practicar diligencias de procedimiento y emitir toda clase de resoluciones, excepción hecha de las sentencias. También habilitarán con carácter de secretario accidental a un empleado del Juzgado.

Artículo 68. Las faltas mayores a cuatro días en el lapso de treinta días, sin que medie causa justificada que califique el Consejo de la Judicatura, se considerarán definitivas, cesando los efectos del nombramiento respectivo.

Artículo 69. El Consejo de la Judicatura resolverá sobre los casos de renuncia, licencia, ausencia temporal y falta definitiva de los jueces de Primera Instancia, en los términos señalados para los jueces de Primera Instancia.

Artículo 70. El Consejo de la Judicatura podrá determinar que para el registro y control de los asuntos, promociones y demás documentación atinente, se instale el sistema informático que se ajuste a las necesidades de los Juzgados, a los requerimientos técnicos y a la disponibilidad presupuestal.

SECCIÓN PRIMERA

De los secretarios de Acuerdos

Artículo 71. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia contará con un secretario General de Acuerdos y cada una de las Salas de los Tribunales del Poder Judicial con un secretario de Acuerdos. Los secretarios de Acuerdos de Sala deberán reunir los mismos requisitos que para ser magistrado; el secretario General de Acuerdos deberá contar con los siguientes requisitos:

I. Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano, en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de la designación;

III. Poseer, al día del nombramiento, título y cédula de licenciado en Derecho o su equivalente expedidos por autoridad o institución legalmente facultada, con una antigüedad mínima de cinco años, y contar, preferentemente, con estudios de posgrado, o con experiencia profesional en la judicatura o ejercicio de la profesión no menor de ese lapso;

IV. Gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y

V. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la ley de la materia.

Artículo 72. El secretario General de Acuerdos y los secretarios de Acuerdos tendrán las atribuciones siguientes:

- I. Dar fe y tramitar los acuerdos, así como redactar las actas correspondientes;
- II. Acordar con el presidente lo relativo a las sesiones y apoyarlo en las tareas que les encomiende;
- III. Dar cuenta en las sesiones de los asuntos a tratar, tomar la votación de sus integrantes cuando sea procedente, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;
- IV. En el caso del secretario General de Acuerdos, turnar a las Salas correspondientes los asuntos de su competencia, conforme al sistema aleatorio determinado en esta Ley;
- V. Realizar la identificación e integración de los expedientes;
- VI. Dar cuenta de las promociones presentadas por las partes, en los términos establecidos por la ley procesal aplicable;
- VII. Proyectar los Acuerdos de trámite;
- VIII. Practicar las diligencias que se ordenen;
- IX. Certificar las actas, resoluciones, expedientes, constancias, documentos y correspondencia oficial;
- X. Vigilar que los asuntos terminados se envíen al archivo judicial para su debida concentración y preservación;
- XI. Imponerse diariamente de la correspondencia que se reciba, y dar cuenta de ella al presidente, para que dicte los Acuerdos pertinentes;
- XII. Supervisar el correcto funcionamiento de la oficialía de partes;
- XIII. En el caso del secretario General de Acuerdos, realizar la compilación, sistematización y publicación de las resoluciones y precedentes obligatorios que dicten el Pleno y las Salas que lo integran, a fin de garantizar su adecuada distribución y difusión, a través del Departamento que para tal efecto se instaure; y

XIV. Las demás que establezca la normativa aplicable.

Artículo 73. El secretario General y los secretarios de Acuerdos de Sala serán sustituidos, en sus faltas temporales y en los casos de excusa o recusación, por el servidor público del Poder Judicial que designe el presidente respectivo.

Artículo 74. Para ser secretario de Acuerdos de Sala o de Juzgado de Primera Instancia deberán reunirse los requisitos siguientes:

- I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
- II. Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en Derecho o su equivalente cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
- III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; y
- IV. Haber asistido y aprobado el curso de capacitación autorizado por el Consejo de la Judicatura.

Artículo 75. Los secretarios de los Juzgados de Primera Instancia tendrán las atribuciones siguientes:

- I. Realizar emplazamientos y notificaciones, cuando así lo establezca la Ley o lo ordene el Juez, con apego en todo momento a la normativa aplicable;
- II. Autorizar los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten los jueces;
- III. Guardar en el secreto del Juzgado los pliegos, escritos, documentos o valores;
- IV. Recibir las promociones, sellando y firmando de recibido en original y copia, y dar cuenta de ello al juez de quien dependan, a más tardar dentro del término de dos días, a fin de recabar el Acuerdo correspondiente;
- V. Integrar y llevar al día los libros de gobierno del Juzgado, bajo su responsabilidad;
- VI. Redactar los acuerdos y actas en los asuntos que se tramiten, recabando la firma del juez y firmando a su vez dichas actuaciones;
- VII. Vigilar que los empleados del Juzgado cumplan con sus deberes, dando cuenta al juez de las faltas o deficiencias que notaren;
- VIII. Distribuir el trabajo entre los empleados, cuidando que el despacho de los asuntos sea expedito, y atender personalmente los que el juez le encomiende;

IX. Sustituir al juez titular en sus faltas temporales, conforme a lo previsto por esta Ley;

X. Vigilar la exactitud de los datos estadísticos que se rindan;

XI. Autorizar, previo acuerdo del juez, las fotocopias y copias certificadas de constancias judiciales que soliciten las partes o quienes tengan personalidad para hacerlo; y

XII. Las demás que establezca la normativa aplicable.

Artículo 76. Los secretarios de Acuerdos de los Juzgados de Primera Instancia tendrán bajo su cuidado y responsabilidad el archivo, mobiliario y equipo de la oficina a su cargo y, en su caso, el resguardo de los bienes muebles que pongan a su disposición.

SECCIÓN SEGUNDA

De los secretarios de Estudio y Cuenta

Artículo 77. Cada magistrado con adscripción a Sala o Tribunal, así como los jueces, con excepción de aquellos que apliquen el sistema acusatorio adversarial, contarán con los secretarios de estudio y cuenta necesarios para el buen desempeño de sus funciones, los cuales serán nombrados en los términos que disponga esta Ley y según lo permita la partida presupuestal respectiva.

Artículo 78. Los secretarios de Estudio y Cuenta deberán reunir los requisitos siguientes:

I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Poseer al día del nombramiento, título de licenciado en Derecho o su equivalente cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal; y

IV. Haber asistido y aprobado el curso de capacitación autorizado por el Consejo de la Judicatura.

Artículo 79. Los secretarios de Estudio y Cuenta tendrán las atribuciones siguientes:

- I. Acordar con el magistrado o juez de su adscripción, los asuntos que les sean encomendados;
- II. Elaborar los proyectos de resolución de los asuntos que se les encarguen; y
- III. Las demás que establezca la normativa aplicable.

SECCIÓN TERCERA

De los actuarios y de las Centrales de Actuarios

Artículo 80. Para ser actuario judicial se requiere:

- I. Ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
- II. Poseer, al día del nombramiento, título de licenciado en Derecho o su equivalente cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello;
- III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de más de un año de prisión; y
- IV. Haber asistido y aprobado el curso de capacitación autorizado por el Consejo de la Judicatura.

Artículo 81. Los actuarios judiciales tendrán las atribuciones siguientes:

- I. Notificar en tiempo y forma prescritos por la ley de la materia, las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados;
- II. Practicar las diligencias que les encomiende el órgano de su adscripción, y levantar las actas respectivas; y
- III. Las demás que establezca la normativa aplicable.

Artículo 82. La Central de Actuarios es la dependencia encargada de organizar el turno aleatorio y llevar el control de las diligencias que ordenen las autoridades jurisdiccionales locales y federales a realizar fuera de la sede judicial, de acuerdo a la demarcación territorial comprendida en el distrito judicial en que se establezcan y conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura.

En aquellos distritos en que existan dos o más Juzgados de la misma materia, se establecerá una Central de Actuarios.

El Consejo de la Judicatura aprobará el sistema informático a utilizar para la organización del turno de las diligencias de notificación personal, citación o emplazamientos ordenados por los Juzgadores respectivos.

El índice y control de las actuaciones practicadas por los integrantes de la Central de Actuarios se llevará de manera electrónica, con excepción de aquellos casos autorizados por el Consejo de la Judicatura, en que se realizará el resguardo escrito conforme al Reglamento respectivo.

Artículo 83. Cada Central de Actuarios estará a cargo de un coordinador, de los actuarios y del personal administrativo necesario para el cumplimiento de sus funciones, conforme al Reglamento que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura, en el que se establecerán las bases de organización y funcionamiento.

Artículo 84. Para ser coordinador de la Central de Actuarios se requiere:

- I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
- II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de la designación;
- III. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;
- IV. Ser licenciado en Derecho, con título y cédula profesional con antigüedad de cinco años; y
- V. Acreditar la experiencia y capacidad indispensables para el desempeño del cargo.

SECCIÓN CUARTA

De las notificaciones electrónicas

Artículo 85. En los procedimientos y procesos judiciales, así como en los asuntos administrativos que se tramiten en el Poder Judicial, en sustitución de las notificaciones tradicionales se podrá notificar a las partes e interesados por cualquier medio electrónico que así lo permita, previa autorización del Consejo de la Judicatura del Estado.

Las partes expresarán su voluntad a la autoridad que conozca del asunto para que sean notificados a través de esa vía; aun las de carácter personal serán igualmente válidas.

El Consejo de la Judicatura implementará los mecanismos tecnológicos que garanticen la certeza jurídica y la confiabilidad de las notificaciones por los medios electrónicos que hayan sido previamente autorizados, y podrá celebrar los convenios de colaboración respectivos con la autoridad competente, a fin de hacer uso de la firma electrónica avanzada.

CAPÍTULO VI

DE LOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Artículo 86. Serán auxiliares de la administración de justicia:

I. Los servidores públicos dependientes de la Dirección de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado;

II. Los notarios, corredores públicos, albaceas provisionales y definitivos, tutores o curadores, y los depositarios cuya designación no corresponda a los interesados en los juicios;

III. Los peritos, traductores e intérpretes;

IV. Los servidores públicos del Registro Civil;

V. Los servidores públicos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio;

VI. Las corporaciones policíacas estatales y municipales;

VII. Los responsables de las funciones de prevención y reinserción social; y

VIII. Los demás servidores públicos del Estado y municipios, a los que las leyes confieran ese carácter.

Los auxiliares de la administración de justicia cooperarán con las autoridades judiciales, en los términos que éstas legalmente lo soliciten.

TÍTULO TERCERO

DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO I

DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Artículo 87. El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un magistrado que no integrará Sala. El presidente será elegido por el Pleno cada tres años, en la primera semana de diciembre, y podrá ser reelegido por una sola vez; al concluir su gestión retornará a su adscripción de origen.

Artículo 88. El presidente del Tribunal Superior de Justicia tendrá las atribuciones siguientes:

I. Representar legalmente al Tribunal y al Consejo de la Judicatura y asumir, para los efectos legales procedentes, la representación del Poder Judicial;

II. Velar en todo momento por la autonomía e independencia de los órganos del Poder Judicial y por la inviolabilidad de los recintos judiciales, para lo cual podrá solicitar, en caso necesario, el auxilio de la fuerza pública;

III. Designar como su representante para asuntos concretos a otro magistrado o servidor público del Poder Judicial;

IV. Celebrar convenios y contratos en la esfera de su competencia;

V. Presentar ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, en la tercera semana de noviembre de cada año, un informe por escrito de las actividades realizadas por el Tribunal que preside, sus organismos y los Juzgados. Este informe se remitirá al Congreso del Estado;

VI. Dar cuenta al Pleno de las demandas instauradas en contra de los servidores públicos a que se refiere el artículo 77 de la Constitución Política del Estado;

VII. Acordar en materia penal la prórroga de jurisdicción, conjuntamente con los presidentes de las Salas Penales;

VIII. Acordar sobre la sustitución de los magistrados en caso de excusa o impedimento. De ser calificados de legales, el presidente del Tribunal proveerá lo conducente para retornar los asuntos necesarios, a fin de compensar la carga de trabajo entre los magistrados;

IX. Dar cuenta al Pleno de los casos en que los magistrados se encuentren impedidos, así como de aquellos en los que se excusen sin motivo legal, a efecto de que, verificada la irregularidad, se proceda conforme a la ley;

X. Imponer correcciones disciplinarias a los promoventes, litigantes o particulares que en sus escritos falten al respeto a los presidentes, magistrados o consejeros, o cuando de viva voz incurran en la misma falta, o interrumpen cualquier sesión del Pleno del Tribunal Superior, de los plenos de las Salas o del Pleno del Consejo de la Judicatura.

Sin perjuicio de las atribuciones que confieren las leyes procesales respectivas a los magistrados y jueces, podrá imponer medios de apremio a cualquier servidor público o empleado que no atienda los requerimientos que, por escrito, le formulen los presidentes, magistrados o consejeros, con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

XI. Acordar, previa solicitud del Pleno de la Sala correspondiente, de los jueces o del titular del órgano administrativo respectivo, el nombramiento y, en su caso, remoción, de los secretario (sic) de Acuerdos de Sala, de los secretarios de Estudio y Cuenta y demás personal del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo que señale el Reglamento y fije el presupuesto;

XII. Vigilar que los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia cumplan sus deberes oficiales, y exhortarlos para que administren pronta y cumplida justicia y, en su caso, aplicar las correcciones disciplinarias que correspondan;

XIII. Disponer, en casos urgentes, lo necesario para la correcta impartición de justicia, e informar de las medidas adoptadas en la sesión siguiente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura, según corresponda, para los efectos procedentes;

XIV. Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura;

XV. Ordenar y coordinar la atención de la correspondencia del Tribunal, así como su trámite, envío de exhortos y cartas rogatorias;

XVI. Convocar a sesiones extraordinarias, en los términos que disponga esta Ley;

XVII. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno hasta ponerlos en estado de resolución, con excepción de los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 16 de esta Ley;

XVIII. Ordenar la publicación de los precedentes obligatorios que dicten el Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia, en los términos que señale su Reglamento;

XIX. Conceder audiencia pública;

XX. Dictar los acuerdos que sean pertinentes en todos los recursos que se le dirijan al Tribunal Superior de Justicia o al Consejo de la Judicatura, y firmar los oficios que se expidan a los otros Poderes del Estado u otras entidades;

XXI. Vigilar el debido cumplimiento de los acuerdos del Pleno, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de la Judicatura, y de los que él mismo dictare;

XXII. Conocer de los avisos de ausencia y de los permisos sin goce de sueldo que los magistrados soliciten en términos de esta Ley;

XXIII. Informar a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de los acuerdos tomados por el Consejo de la Judicatura;

XXIV. Proponer al Pleno del Tribunal y al Consejo de la Judicatura las medidas indispensables para la mejor administración de justicia;

XXV. Recibir los anteproyectos de presupuesto que le remitan las Salas y Tribunales, a más tardar el quince de septiembre de cada año, para someterlos a la consideración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, según corresponda;

XXVI. Enviar, en los términos del Código Financiero para el Estado, el proyecto de presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, así como el del Consejo de la Judicatura, el que incluirá el de los demás Tribunales, Juzgados y órganos del Poder Judicial;

XXVII. Enviar al Congreso del Estado la cuenta pública documentada y consolidada de los Tribunales y del Consejo de la Judicatura, en los términos de la Ley respectiva;

XXVIII. Legalizar, por sí o por conducto del secretario General de Acuerdos, la firma de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, en los casos en que la Ley exija este requisito;

XXIX. Comunicar al Gobernador del Estado las ausencias definitivas de los magistrados del Poder Judicial, y las temporales que deban ser suplidas mediante su nombramiento, en términos de la Constitución Política del Estado;

XXX. Conducir la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia;

XXXI. Ejercer el presupuesto del Tribunal bajo los criterios de legalidad, transparencia, imparcialidad, honradez, eficiencia y austeridad; y

XXXII. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes del Estado.

Artículo 89. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, en sus ausencias temporales que no excedan de treinta días consecutivos, será sustituido por el magistrado que él designe, pero si excediere de ese término, la designación del magistrado presidente interino la hará el Pleno del Tribunal.

De presentarse la solicitud de una licencia sin goce de sueldo, corresponderá al Congreso del Estado otorgarla hasta por ciento veinte días.

Artículo 90. La Coordinación General de Comunicación Social será la unidad administrativa responsable de instrumentar la difusión informativa, publicitaria y promocional de las actividades, obras y servicios del Poder Judicial, a través de los distintos medios de comunicación o de manera directa. Contará con la estructura y el personal previstos en el presupuesto correspondiente.

Artículo 91. La Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Judicial será la responsable de proporcionar la información pública, en términos de la ley de la materia.

Artículo 92. La Unidad de Género del Poder Judicial tendrá como atribuciones:

I. Verificar la incorporación y transversalidad de la perspectiva de género en la planeación, programación y presupuesto anual del Poder Judicial;

II. Coordinar la formación, capacitación y certificación del personal en materia de género e igualdad sustantiva;

III. Establecer y concretar acuerdos con las unidades responsables del Poder Judicial para ejecutar las políticas, acciones y programas de la materia;

IV. Coordinar la elaboración del Plan de Acción para la Igualdad en el Poder Judicial;

V. Planificar y promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de mujeres y hombres en el ámbito de su competencia;

VI. Dar seguimiento a las órdenes y medidas de protección y a la ejecución de éstas, para efectos de rendir informes al Banco Estatal de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres;

VII. Coordinar el sistema de registro que incorpore indicadores que faciliten el monitoreo de las tendencias socio-jurídicas de la violencia contra las mujeres y del acceso de las mujeres a la justicia;

VIII. Elaborar los informes sobre los procedimientos judiciales en materia de violencia de género contra las mujeres; y

IX. Las demás que establezca la normativa aplicable en la materia.

El titular de la Unidad de Género será designado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y deberá acreditar tener conocimientos sobre la materia.

CAPÍTULO II

DE LOS PRECEDENTES DEL PODER JUDICIAL

Artículo 93. Los precedentes que establezcan el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y sus Salas y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje serán obligatorios para los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía, en su misma materia, y se sujetarán a las reglas siguientes:

I. Se integrarán con cinco resoluciones consecutivas en el mismo sentido en la materia, no interrumpidas por otra en contrario y aprobadas por unanimidad de votos de sus magistrados;

II. Se interrumpirán, y dejarán de tener carácter obligatorio, con una resolución dictada en sentido contrario, aprobada por unanimidad de votos. En dicha resolución deberá razonarse y fundarse el cambio de criterio; y

III. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia resolverá las contradicciones entre los precedentes obligatorios que emitan sus Salas, las cuales podrán ser denunciadas por los magistrados, jueces, el Fiscal General o cualquiera de las partes que intervengan en el juicio.

Artículo 94. El Tribunal Superior de Justicia realizará la compilación, sistematización y publicación de las resoluciones y precedentes obligatorios que dicten el Pleno y las Salas que lo integran, a fin de garantizar su adecuada distribución y difusión, a través de la Dirección o departamento que el presidente del Tribunal Superior de Justicia designe; asimismo, contará con el personal suficiente para el ejercicio de sus funciones de acuerdo al presupuesto otorgado.

CAPÍTULO II (SIC)

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

SECCIÓN PRIMERA

Integración y funcionamiento

Artículo 95. El Consejo de la Judicatura será el órgano encargado de conducir la administración, vigilancia, disciplina y carrera del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia; y estará integrado por cinco miembros:

I. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien lo presidirá;

II. Dos magistrados nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante votación secreta, provenientes: uno del propio Tribunal Superior de Justicia y otro, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje;

III. Un consejero propuesto por el Gobernador y ratificado por el Congreso; y

IV. Un consejero designado por el Congreso.

El consejero propuesto por el Gobernador y el designado por Congreso deberán satisfacer los requisitos señalados en la Constitución Política del Estado.

Artículo 96. Los consejeros, a excepción del presidente, durarán en su cargo cinco años y no podrán ser designados para otro período. Los consejeros provenientes de los Tribunales, al concluir su encargo, retornarán a su adscripción de origen.

Artículo 97. Los consejeros de la Judicatura, con excepción de su presidente, serán suplidos, en sus faltas temporales, por el secretario de Acuerdos del Consejo.

Las licencias o permisos de los consejeros serán otorgados en los mismos términos que para los magistrados.

Artículo 98. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia resolverá sobre las ausencias, licencias o renunciaciones de los consejeros que hubiere nombrado, aplicando, en lo conducente, las disposiciones de esta Ley relativas a los magistrados.

Los consejeros cuyo origen sea diverso a los nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrán separarse de su cargo previa licencia temporal que conceda el Congreso del Estado o, en sus recesos, la Diputación Permanente. En ningún caso se concederá a los consejeros licencia con el carácter de indefinida, ni tampoco por un tiempo mayor de ciento veinte días naturales durante el período de un año. El Congreso del Estado o, en sus recesos, la Diputación Permanente resolverá sobre la renuncia que presenten los consejeros de la Judicatura que hubiese ratificado o designado.

Artículo 99. Son atribuciones de los consejeros:

I. Asistir a las sesiones del Consejo y emitir su voto razonado en los asuntos de su competencia;

II. Desempeñar y cumplir las comisiones que les fueren encomendadas por el Pleno del Consejo o por la Presidencia del mismo; y

III. Las demás que establezca la normativa aplicable.

Artículo 100. Las sesiones del Consejo de la Judicatura serán públicas, salvo aquellas en las que la naturaleza del asunto requiera que sean privadas a juicio del

Consejo. Para que pueda sesionar válidamente el Consejo, deberán estar presentes por lo menos tres consejeros y el presidente.

Artículo 101. Las resoluciones del Consejo de la Judicatura se tomarán por unanimidad o por mayoría de votos de los consejeros presentes y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. Los consejeros sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal.

Las resoluciones o acuerdos del Consejo de la Judicatura en materia disciplinaria se notificarán personalmente a las partes interesadas.

La notificación y, en su caso, la ejecución de las resoluciones deberán realizarse por conducto de los órganos que el propio Consejo designe.

Siempre que el Consejo estime que sus acuerdos sean de interés general, deberá ordenar su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Artículo 102. El Consejo de la Judicatura, con base en las atribuciones que le otorga esta Ley y de acuerdo al presupuesto, tendrá las direcciones, jefaturas de departamento y oficinas estrictamente necesarias para su funcionamiento, con la distribución de competencias que señale su Reglamento.

SECCIÓN SEGUNDA

Atribuciones

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

Artículo 103. El Consejo de la Judicatura tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia;

II. Emitir circulares y acuerdos generales, así como suscribir contratos, acuerdos y convenios para la correcta impartición de justicia;

III. Formar, actualizar y especializar a los servidores públicos del Poder Judicial, así como desarrollar la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia;

IV. Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto de egresos del Poder Judicial, con excepción del correspondiente al Tribunal Superior de Justicia, para su remisión al Ejecutivo en términos de ley;

V. Celebrar sesiones ordinarias una vez por semana y extraordinarias cada vez que se requieran, previa convocatoria de su presidente o a solicitud de cualquiera de sus integrantes;

VI. Erigir, de conformidad con el Reglamento y la disponibilidad presupuestal, el número de Juzgados en las materias que se requieran, determinando la cabecera del distrito o ciudad donde residirán, y adscribir a los jueces que integrarán cada uno de ellos;

VII. Determinar, mediante acuerdos generales, la competencia por materia y territorio de cada uno de los Juzgados, el sistema y criterios de distribución de los asuntos que deban conocer y la categoría de éstos, atendiendo a su función y al tabulador que para el caso se establezca o cualquier disposición que sea requerida para la correcta impartición de justicia;

(REFORMADA, G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

VIII. Crear, de conformidad con el Reglamento y el presupuesto del propio Poder Judicial, los juzgados necesarios para la implementación del sistema acusatorio adversarial, así como aquellos en materia laboral;

IX. Con excepción del personal del Tribunal Superior de Justicia, nombrar, remover, resolver sobre la adscripción y renuncia de los servidores públicos del Poder Judicial, así como cambiar libremente de adscripción, según las necesidades del servicio, a jueces y secretario de Primera Instancia;

X. Decretar el interinato cuando por algún motivo justificado se ausente temporalmente un juez titular del órgano jurisdiccional correspondiente y, en consecuencia a ello, nombrar juez interino que lo ocupe mientras dure su ausencia;

XI. Nombrar a los servidores públicos encargados de la administración del Poder Judicial y acordar lo relativo a sus licencias, remociones, renunciaciones y vacaciones;

XII. Nombrar y remover libremente jueces provisionales cuando sea necesario ocupar un Juzgado sin titular mientras dure la vacancia;

XIII. Nombrar y remover libremente a los titulares de las unidades de enlace administrativo, de acuerdo a las necesidades y a la disponibilidad presupuestal;

XIV. Ejercer el presupuesto del Poder Judicial, con excepción del correspondiente al Tribunal Superior de Justicia, así como administrar el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, bajo los principios de transparencia, eficacia, honradez, imparcialidad y austeridad;

XV. Atender las observaciones y recomendaciones que le formule el Órgano de Fiscalización Superior, respecto del ejercicio de su presupuesto, así como de la

administración del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, en los términos que establezca la normativa aplicable;

(REFORMADA, G.O. 20 DE MARZO DE 2019)

XVI. Resolver, previa garantía de audiencia, fundando y motivando su resolución, sobre las quejas administrativas, inductivos de responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial y excitativas de justicia mediante los procedimientos establecidos en esta Ley, en la Ley para Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas para el Estado, así como en los Reglamentos y acuerdos que el propio Consejo dicte en materia disciplinaria, con excepción de los Magistrados de los Tribunales y del Personal del Tribunal Superior de Justicia;

XVII. Convenir con instituciones de educación superior, a efecto de que la carrera judicial se desarrolle a nivel de excelencia, y aplicar los exámenes de oposición para ocupar los cargos relativos a la misma;

XVIII. Implementar los mecanismos de evaluación y certificación del personal que integre el Sistema de Carrera Judicial, de conformidad con el Reglamento que para tal efecto expida;

XIX. Acordar como medida cautelar la suspensión temporal de los servidores públicos a los que se les inicie investigación para determinar su responsabilidad administrativa o penal, siempre y cuando existan elementos suficientes que hagan suponer que la continuidad en el ejercicio del cargo del servidor investigado podría traer consigo afectación a la función jurisdiccional. Dicha suspensión cesará una vez que se resuelva en definitiva, sin que ello prejuzgue la responsabilidad que se le impute;

XX. Controlar, evaluar, inspeccionar y vigilar los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de los órganos y servidores públicos del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, durante el ejercicio presupuestal correspondiente;

XXI. Expedir los reglamentos para el ejercicio de sus atribuciones, así como los lineamientos y acuerdos de observancia general necesarios;

XXII. Celebrar contratos para atender las necesidades administrativas del Poder Judicial, en los términos señalados por la normativa aplicable;

XXIII. Organizar conferencias y demás actividades que resulten de interés para el Poder Judicial;

XXIV. Practicar u ordenar visitas a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, así como realizar todo tipo de investigaciones;

XXV. Conocer y resolver, con excepción de los magistrados, sobre los casos de renuncia, licencia, ausencia temporal, suplencia y faltas definitivas de los servidores públicos del Poder Judicial, en los términos que señale esta Ley;

XXVI. Calificar los impedimentos de los consejeros;

(REFORMADA, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2018)

XXVII. Desarrollar, por conducto de la Escuela Judicial del Estado, tareas de formación, actualización, investigación, capacitación, especialización e impartición de educación superior a los miembros del Poder Judicial, así como a los interesados en ingresar a la carrera judicial. El Consejo establecerá, en el reglamento correspondiente, los mecanismos de aprobación de los planes y programas de estudio, además de los requisitos de ingreso y promoción;

XXVIII. Fijar las bases de la política informática y de información estadística que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial, así como regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir para conocimiento público, con apego a las normas en materia de transparencia y acceso a la información pública y datos personales, la documentación generada por dicho Poder;

XXIX. Administrar el sistema aleatorio para la distribución de los asuntos que se radiquen en los Tribunales o Juzgados del Poder Judicial, en los términos previstos por esta Ley;

XXX. Nombrar y remover libremente a los defensores de oficio. Tratándose de los defensores adscritos al Tribunal Superior de Justicia, será a propuesta del presidente de la Sala respectiva;

XXXI. Tener a su cargo el registro de los profesionales que, en calidad de peritos y de conformidad con lo dispuesto en la ley, puedan fungir como auxiliares de la administración de justicia, el que deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Estado, dentro de los primeros diez días de cada año;

XXXII. Remitir a los presidentes de los Tribunales del Poder Judicial las solicitudes de información presentadas por las partes acerca del estado que guardan los asuntos radicados bajo su jurisdicción, a efecto de que las mismas sean atendidas oportunamente, salvo que la ley exija reserva;

XXXIII. Tener bajo su cuidado el Archivo Judicial, para el resguardo de los expedientes que provengan de los Tribunales del Poder Judicial, relativos a procesos concluidos y demás documentos que se reciban y deban archivarse; así como la integración y conservación del acervo de la Biblioteca del Poder Judicial;

(REFORMADA, G.O. 4 DE FEBRERO DE 2020)

XXXIV. Previa garantía de audiencia, imponer multa del valor diario de veinte a cien Unidades de Medida y Actualización vigente a quien denueste a un servidor público

del Poder Judicial, en cualquier promoción que presente ante el Consejo de la Judicatura;

XXXV. Aceptar donaciones o legados puros y simples en favor de los órganos del Poder Judicial, previo análisis de su licitud;

XXXVI. Tomar las medidas necesarias a fin de asegurar la especialidad de los jueces para adolescentes, en los casos de excusa, recusación o impedimento;

XXXVII. Establecer las bases para que el Comité Técnico y de Administración del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia disponga de recursos para el retiro de servidores públicos del Poder Judicial; y

XXXVIII. Acordar el haber de retiro que a petición de parte soliciten los jueces titulares que tengan más de veinte años de antigüedad en el cargo y más de cincuenta años de edad cumplidos.

El haber de retiro para jueces será por el monto que comprenda el 25% de las percepciones de un juez titular en activo sin comprender las prestaciones asignadas para el ejercicio de su función.

Podrá suspenderse en caso de que el servidor judicial realice labores remuneradas distintas a la docencia.

(ADICIONADO, G.O. 3 DE OCTUBRE DE 2018)

Será otorgado únicamente durante un periodo idéntico al que fungió como Juez.

XXXIX. Determinar en los casos que sea necesario, la micro regionalización de competencias para los Juzgados de Primera Instancia.

XL. Emitir previo análisis, dictamen favorable o no favorable, según sea el caso, respecto del magistrado a ratificar para el segundo período, en términos de lo establecido en la Constitución del Estado y esta Ley; y

XLI. Las que establezcan la Constitución Política del Estado y demás normativa aplicable.

SECCIÓN TERCERA

Comisiones

Artículo 104. Para el mejor desarrollo de sus funciones, el Consejo de la Judicatura contará con dos comisiones permanentes y las transitorias que se requieran.

Las comisiones permanentes serán la de Aprovisionamiento y la de Carrera Judicial, Disciplina y Vigilancia.

Con carácter de transitorias, el Consejo podrá crear las comisiones que estime necesarias, determinando en el acuerdo respectivo su integración, duración y funciones.

Las sesiones de las comisiones serán privadas. En el supuesto de votación dividida entre los consejeros integrantes de las comisiones, el asunto será resuelto por el Pleno del Consejo.

Artículo 105. Las comisiones del Consejo tendrán las funciones comunes siguientes:

- I. Estudiar y dictaminar los asuntos turnados por el Pleno y practicar las diligencias que les sean encomendadas;
- II. Proponer al Pleno la aprobación de los acuerdos necesarios para el desarrollo de sus funciones; y
- III. Las demás que se señalen en la normativa aplicable.

SECCIÓN CUARTA

Del presidente del Consejo

Artículo 106. El presidente del Consejo de la Judicatura tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Representar al Consejo;
- II. Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno del Consejo y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los proyectos de resolución correspondientes. En caso de que el presidente estimare dudoso o trascendental algún trámite, designará a un consejero ponente para que someta el asunto a la consideración del Pleno del Consejo, a fin de que éste determine lo que corresponda;
- III. Presidir el Pleno del Consejo, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones;
- IV. Despachar la correspondencia oficial del Consejo, salvo la reservada a las comisiones;
- V. Vigilar el funcionamiento de los órganos auxiliares del Consejo;

VI. Firmar las resoluciones y Acuerdos del Pleno del Consejo, y legalizar, por sí o por conducto del secretario ejecutivo que al efecto designe, la firma de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado en los casos en que la ley exija este requisito;

VII. Autorizar, con el secretario de Acuerdos, las actas y resoluciones que se dicten en los asuntos de la competencia del Consejo; y

VIII. Las demás que señale la normativa aplicable.

SECCIÓN QUINTA

Del secretario de Acuerdos

Artículo 107. El Consejo de la Judicatura contará con un secretario de Acuerdos, que deberá satisfacer los mismos requisitos que el del Tribunal Superior de Justicia, y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Dar fe y tramitar los acuerdos, así como redactar las actas correspondientes;

II. Acordar con el presidente lo relativo a las sesiones y apoyarlo en las tareas que le encomiende;

III. Dar cuenta en las sesiones de los asuntos a tratar, tomar la votación de los integrantes del Consejo cuando sea procedente, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

IV. Realizar la identificación e integración de los expedientes;

V. Proyectar los acuerdos de trámite;

VI. Practicar las diligencias que le ordenen;

VII. Certificar las actas, resoluciones, expedientes, constancias, documentos y correspondencia oficial;

VIII. Vigilar que los asuntos terminados se envíen al archivo judicial para su debida concentración y preservación;

IX. Imponerse diariamente de la correspondencia que se reciba, y dar cuenta de ella al presidente, para que dicte los acuerdos respectivos;

X. Supervisar el correcto funcionamiento de la oficialía de partes; y

XI. Las demás que establezca la normativa aplicable.

CAPÍTULO III

DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones Generales

Artículo 108. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura contará con los órganos señalados en el artículo 2, Apartado B, fracción II, de esta Ley.

Los titulares de dichos órganos deberán contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, relativo a la función que desempeñen, tener experiencia mínima de cinco años en la carrera afín a la actividad a desarrollar, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año.

Los titulares de los órganos, con excepción de la Visitaduría Judicial, serán nombrados y removidos libremente por el Consejo de la Judicatura.

SECCIÓN SEGUNDA

De la Visitaduría Judicial

Artículo 109. La Visitaduría Judicial será el órgano auxiliar del Consejo competente para inspeccionar el desempeño de los jueces, secretario, actuarios y demás servidores públicos de los Juzgados y el funcionamiento de éstos y de las áreas administrativas que forman parte del Poder Judicial, excepto el Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 110. La Visitaduría Judicial se integrará por los magistrados no adscritos a Sala o Tribunal. Los magistrados que integren Sala podrán participar en los programas de visita, en los términos de la fracción VII del artículo 6 de esta Ley.

De igual manera, los consejeros, así como los jueces que el propio Consejo determine, tendrán la función de visitadores.

Artículo 111. Los visitadores tendrán las atribuciones siguientes:

I. Inspeccionar el desempeño de los jueces, secretario y demás servidores públicos de los Juzgados y de las áreas que forman parte del Poder Judicial, excepto el Tribunal Superior de Justicia y las áreas a cargo de éste;

II. Informar, mediante avisos en estrados, de su llegada a inspeccionar, a efecto de que comparezca ante su presencia cualquier persona interesada en las actividades relacionadas con la función judicial;

III. En caso de detectar irregularidades, tendrán la obligación de dar vista al Consejo de la Judicatura, en términos de lo dispuesto por esta Ley; y

IV. Las demás que le confieran la presente Ley y otros ordenamientos legales aplicables.

Artículo 112. El programa de visitas judiciales será elaborado por la Comisión de Carrera Judicial, Disciplina y Vigilancia y deberá ser sometido al Pleno del Consejo, a más tardar el último día del mes de marzo del año respectivo.

El Consejo ordenará visitas extraordinarias, siempre que a su juicio existan elementos que hagan presumir irregularidades cometidas por los servidores públicos de las áreas administrativas relacionadas con la función de la Visitaduría Judicial o cuando exista queja fundada de parte interesada.

En las visitas se revisará el período que determine el Consejo de la Judicatura y durarán el tiempo necesario para tal efecto.

Artículo 113. El Consejo procurará que los visitadores no inspeccionen y supervisen a los mismos órganos judiciales en forma consecutiva, excepto cuando el visitador hubiese hecho observaciones y se requiriera revisar su cumplimiento.

Artículo 114. En las visitas ordinarias, los comisionados, de acuerdo con las particularidades de cada órgano, además de lo que específicamente determine el Consejo de la Judicatura, realizarán lo siguiente:

I. Analizarán la lista del personal para confirmar su asistencia;

II. Comprobarán si se encuentran debidamente asegurados los instrumentos y objetos de delito, así como los billetes de depósito;

III. Revisarán los libros de gobierno, a fin de determinar si se encuentran en orden y contienen los datos requeridos;

IV. Harán constar el número de asuntos penales, de adolescentes infractores, civiles, familiares, mercantiles y de jurisdicción voluntaria que se hayan tramitado y de juicios de amparo que se hayan promovido en contra del órgano visitado; durante el tiempo que comprenda la revisión, determinarán si los procesados que disfrutaron

de libertad caucional o alguna otra medida cautelar han cumplido con las obligaciones establecidas y si en algún proceso en suspenso transcurrió el tiempo de prescripción de la acción penal;

V. Examinarán los expedientes o registros derivados de las actuaciones judiciales realizados con motivo de los procesos o diligencias de jurisdicción voluntaria que correspondientes al órgano jurisdiccional y que se estime conveniente para hacer una evaluación general, a fin de verificar que las resoluciones y acuerdos fueron dictados y cumplidos oportunamente; que las notificaciones y diligencias se efectuaron en los plazos legales; que los exhortos y despachos han sido diligenciados y si se han observado los términos constitucionales y garantizado los derechos humanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado otorgan a los procesados; y

VI. Recomendarán, en caso de advertir que en un proceso se venció el término para dictar sentencia, que ésta se pronuncie a la brevedad, haciéndose constar en el expediente revisado.

Artículo 115. De toda visita de inspección deberá levantarse acta circunstanciada, en la que se hará constar el desarrollo de la misma, las quejas o denuncias presentadas en contra de los titulares y demás servidores del órgano de que se trate, las manifestaciones que respecto de la visita o del contenido del acta quisieron realizar los propios titulares o servidores del órgano, y la firma del juez o titular del área que corresponda y la del visitador, además de recabar la documentación que sirva de soporte.

Una copia del acta levantada por el visitador será entregada al titular del órgano visitado y la original al Consejo de la Judicatura, a fin de determinar lo que corresponda. En caso de responsabilidad, se procederá en los términos previstos en la presente Ley.

Artículo 116. Los visitadores podrán auxiliarse de los sistemas o programas informáticos debidamente establecidos por el Consejo de la Judicatura.

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2018)
SECCIÓN TERCERA

De la Escuela Judicial del Estado

(REFORMADO, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2018)

Artículo 117. La Escuela Judicial del Estado es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, que tiene por objeto la capacitación, formación, actualización y profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Judicial, así como: investigar, preservar, transmitir y extender el conocimiento de todos aquellos preceptos y actuaciones que conforman la estructura doctrinaria, teórica y práctica

de la función jurisdiccional; La Escuela se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.

La Escuela Judicial del Estado, podrá celebrar los convenios necesarios para adquirir reconocimientos de validez oficial que le permitan impartir cursos con grados académicos tanto al personal de la institución como al público en general.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2018)

Artículo 118. La Escuela Judicial del Estado estará conformada por:

I. El director;

II. El jefe de la Unidad de Carrera Judicial;

III. El jefe de la Unidad de Capacitación y Actualización;

IV. El jefe de la Unidad de Investigación y Difusión; y

V. Las demás unidades de apoyo que se requieran para el buen desempeño de sus atribuciones y que permita el presupuesto.

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2018)

Artículo 119. El director de la Escuela Judicial del Estado será nombrado por el Consejo de la Judicatura y deberá reunir el perfil académico, técnico y profesional para desempeñar el cargo.

Para ser titular de alguna de las unidades señaladas en el artículo anterior se deberá contar con título profesional y cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, relativo a la función a desempeñar, así como cubrir los requisitos señalados en el Reglamento atinente.

Artículo 120. El ingreso, permanencia y promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial se hará mediante el Sistema de Carrera Judicial, en los términos que señale el Reglamento respectivo.

Artículo 121. La Carrera Judicial se integrará por las categorías siguientes:

I. Juez de Primera Instancia;

II. Secretario de Acuerdos o de Estudio y Cuenta de los Tribunales y Salas del Poder Judicial;

III. Secretario de Acuerdos de Primera Instancia;

IV. Secretario de Estudio y Cuenta de Primera Instancia; y

V. Actuario del Poder Judicial.

Artículo 122. El Consejo de la Judicatura expedirá el reglamento correspondiente, con el fin de asegurar la idoneidad, estabilidad e independencia de la carrera judicial, así como regular las condiciones para su ingreso, permanencia y terminación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 123. La Revista Jurídica Veracruzana estará a cargo de la Comisión de Carrera Judicial, Disciplina y Vigilancia, y en la misma se publicarán las tesis jurídicas más importantes sustentadas por las Salas y los Juzgados de Primera Instancia; así como artículos doctrinarios, leyes, reglamentos e investigaciones documentales que sean de interés jurídico.

SECCIÓN CUARTA

De la Administración del Consejo

Artículo 124. La Dirección General de Administración será el área encargada de organizar y aplicar los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial, mediante la aplicación de las normas, políticas y procedimientos que para tal efecto se establezcan.

Artículo 125. La Dirección General de Administración tendrá las atribuciones siguientes:

I. Administrar el presupuesto del Poder Judicial, conforme a los lineamientos del Consejo de la Judicatura y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia;

II. Prestar el auxilio necesario en la elaboración del proyecto de presupuesto del Poder Judicial;

III. Tener a su cargo la contabilidad del Poder Judicial, conforme a los criterios y lineamientos que expida el Consejo de la Judicatura y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia;

IV. Formular mensualmente los estados financieros del Poder Judicial, así como el informe pormenorizado relativo a la conclusión de cada ejercicio fiscal;

V. Ejercer el control presupuestal y establecer procedimientos para la correcta y transparente aplicación de los fondos públicos, previa aprobación del Consejo y, en su caso, del Pleno;

VI. Diseñar, integrar e implementar, conforme a las directrices que establezca el Consejo, un sistema de control y evaluación que optimice la eficiencia de los recursos asignados a los programas autorizados;

VII. Integrar, registrar y controlar el inventario de los bienes muebles e inmuebles asignados al Consejo, los Juzgados de Primera Instancia y Especializados, para Adolescentes, Municipales; así como a los Tribunales del Poder Judicial, y proveer lo necesario para su vigilancia, mantenimiento, conservación y acondicionamiento;

VIII. Someter a la consideración de la Comisión de Aproveccionamiento y, en su caso, del Comité Técnico y de Administración del Fondo Auxiliar, la celebración de contratos para el arrendamiento, adquisición y enajenación de todo tipo de bienes, incluidos los objetos e instrumentos materia del delito, así como la contratación de obra y prestación de servicios;

IX. Elaborar los proyectos de manuales de organización y procedimientos del Consejo; y

X. Las demás que establezca la normativa aplicable.

SECCIÓN QUINTA

De la Dirección de Control y Estadística

Artículo 126. Son funciones de la Dirección de Control y Estadística:

I. Implementar los procedimientos, manuales y formatos necesarios para que los órganos jurisdiccionales o administrativos, en tiempo y forma, presenten los informes estadísticos requeridos;

II. Clasificar los informes rendidos por los órganos jurisdiccionales, desde el momento del inicio de cada proceso o expediente, integrando tarjeta de control en donde constará la fecha y el sentido de cada una de las resoluciones que se vayan dictando hasta llegar a la sentencia definitiva;

III. Concentrar y clasificar las resoluciones tanto de Primera como de Segunda Instancia que se emitan en todo proceso o procedimiento judicial. La Dirección podrá auxiliarse de sistemas informáticos o de cualquier otro avance de la tecnología para cumplir con esta función, siempre y cuando garantice la seguridad del manejo de la información recopilada.

IV. Dirigir y vigilar las labores de estadística judicial, a efecto que ésta sea exacta y eficaz;

V. Organizar, vigilar y conservar el Archivo Judicial y de la Biblioteca del Poder Judicial; y

VI. Las demás que conforme a las disposiciones vigentes en la materia sean afines a su ramo y la que le sean encomendadas por el Consejo.

SECCIÓN SEXTA

De la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos

Artículo 127. La Dirección de la Defensoría y de Registro Estatal de Peritos tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar las labores de la Defensoría de Oficio del Poder Judicial del Estado, con excepción de la del Tribunal;

II. Evaluar periódicamente el desempeño de los defensores de oficio del Poder Judicial del Estado, con excepción de los adscritos a las Salas del Tribunal;

III. Llevar, a nivel estatal, el registro de los profesionales que, en calidad de peritos y de conformidad con lo dispuesto en la ley, pueden fungir como auxiliares de la administración de justicia. Dicho registro deberá ordenar a los peritos por ramas, especialidades y distritos judiciales;

IV. Gestionar, previo acuerdo del Pleno, la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de las listas de los profesionales registrados, dentro de los primeros diez días de cada año;

V. Dar cuenta al Pleno del Consejo de la Judicatura, de aquellos casos en que los defensores no cumplan adecuadamente sus funciones; y

VI. Las demás que señale la normativa aplicable.

El Reglamento determinará, conforme a lo dispuesto por las Leyes respectivas, la organización y funcionamiento de la Defensoría de Oficio.

SECCIÓN SÉPTIMA

Del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia

Artículo 128. El Consejo de la Judicatura administrará el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, que se ejercerá bajo los criterios de estricta racionalidad, disciplina fiscal, contabilidad, evaluación, información periódica, auditoría y control de gestión que dispongan las leyes de la materia.

Artículo 129. El Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia se integrará con:

- I. El monto de las cauciones que garanticen la libertad provisional y las sanciones pecuniarias de los encausados ante las Salas y Juzgados y que sean hechas efectivas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
- II. El monto de las cauciones que garanticen la libertad condicional de los sentenciados que se encuentren gozando del beneficio relativo, y que sean hechas efectivas de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
- III. El monto de las cantidades otorgadas para obtener los beneficios de la sustitución de las sanciones y de la suspensión condicional de la pena, que se haga efectivo en los casos previstos por el Código Penal;
- IV. Las multas que, por cualquier causa, impusieren los Tribunales, Salas o Jueces;
- V. Los rendimientos que se generen por los depósitos efectuados ante los Tribunales;
- VI. Los productos de la venta de objetos o instrumentos materia del delito, que sean de uso lícito, en la forma y los términos previstos por las leyes y reglamentos del Estado;
- VII. Los productos de la venta de muebles y valores depositados por cualquier motivo ante los Tribunales, que no fueren retirados por quien tenga derecho a ellos dentro del término de un año, computado a partir de la fecha en que hubiese causado ejecutoria la resolución definitiva;
- VIII. El monto de la reparación del daño, cuando la parte ofendida renuncie al mismo o no lo reclame dentro del término de un año, a partir de la fecha en que tenga derecho a obtenerlo, siempre que le hubiese sido notificado;
- IX. Las donaciones o aportaciones hechas a su favor por terceros;
- X. El pago de derechos por la expedición de copias certificadas y certificaciones;
- XI. El monto de los depósitos hechos a favor de terceros, cuando transcurran tres años de constituidos y, previa notificación personal, no sean retirados por el interesado en el plazo de treinta días hábiles;
- XII. Los depósitos en efectivo que, por cualquier causa y mediante la exhibición del certificado de depósito correspondiente, se hubiesen realizado ante los Tribunales. Estos depósitos no causarán intereses a favor de los depositantes, y;
- XIII. Los demás que señale la normativa aplicable.

Artículo 130. El Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia contará con una reserva líquida del 20% para garantizar la solvencia a corto plazo.

Las reservas que no integren el monto descrito en el párrafo anterior, podrán ser utilizadas por el Consejo de la Judicatura para los fines que considere pertinentes, en bienestar de la impartición de justicia y la administración del Poder Judicial.

Artículo 131. Los recursos con los que se integre y opere el Fondo serán diferentes de aquellos que comprenda el presupuesto que el Congreso del Estado apruebe anualmente para el Poder Judicial, y no afectarán las partidas que sean autorizadas mediante dicho presupuesto.

Artículo 132. El Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia estará únicamente obligado a pagar los montos que fundada y motivadamente solicite el juez o parte interesada, dentro de las modalidades, términos y plazos exigidos por la ley.

Artículo 133. El Fondo será manejado y operado mediante un fideicomiso constituido por la institución fiduciaria que determine el Consejo de la Judicatura.

Artículo 134. El Comité Técnico y de Administración del Fondo Auxiliar tendrá las características siguientes:

I. Integración:

a) Dos consejeros, uno procedente de los Tribunales y el otro ratificado o designado por el Congreso del Estado, que serán presidente y vicepresidente, elegidos en votación secreta, y que durarán en el cargo hasta cinco años; y

b) Un secretario, que deberá ser contador público, con título legalmente expedido y registrado, con un mínimo de dos años de experiencia profesional y de reconocida solvencia moral.

II. Funcionamiento:

a) El Comité Técnico será presidido en forma alternada cada seis meses, respectivamente, por el consejero y por el consejero magistrado;

b) En caso de que el consejero magistrado que resulte elegido no acepte el cargo, será sustituido por otro consejero magistrado que acepte esta responsabilidad; y

c) Los consejeros del Comité Técnico desempeñarán su encargo sin derecho a la percepción de honorarios o emolumento adicional alguno. El secretario percibirá la remuneración prevista en el presupuesto.

Artículo 135. El Comité Técnico tendrá las atribuciones siguientes:

I. Ejecutar las políticas de inversión, administración y distribución de los fondos del Fideicomiso, e instruir a la institución fiduciaria respecto del destino de los recursos

que integren el Fondo, en los términos y condiciones autorizados por el Consejo de la Judicatura;

II. Brindar las facilidades necesarias para la realización de las auditorías que requiera la adecuada administración del Fondo y el correcto destino de los recursos que lo integren;

III. Recabar la autorización del Consejo de la Judicatura, para los gastos que la institución fiduciaria deba realizar con cargo a los bienes fideicomitidos y que estén directamente relacionados con los fines del Fideicomiso;

IV. Aprobar anualmente el informe que rinda la institución fiduciaria respecto de la administración, manejo, inversión y destino de los fondos afectos al Fideicomiso, en los términos del contrato que al efecto se celebre, el que deberá ajustarse a las disposiciones legales aplicables;

V. Expedir sus reglas de operación interna; y

VI. Las demás que sean afines al manejo y operación del Fideicomiso.

Artículo 136. El Comité Técnico establecerá los mecanismos de control de gestión que estime necesarios para la integración al Fondo de las cantidades resultantes del cobro judicial o extra judicial de fianzas, depósitos o de cualquier otro tipo de garantía constituida ante las Salas, Juzgados y demás órganos del Poder Judicial.

Artículo 137. Los recursos que integren el Fondo deberán ser invertidos por la institución fiduciaria en valores de renta fija del más alto rendimiento, siempre que éstos permitan la disponibilidad inmediata de las sumas que resulte necesario reintegrar a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derecho a ellas.

Artículo 138. De toda exhibición o devolución de certificados de depósito de dinero y valores, las Salas, Juzgados o las áreas administrativas del Poder Judicial autorizadas para recibirlos, deberán reportarlas al Fondo dentro de los cinco días hábiles siguientes. Lo anterior, sin perjuicio de que, en cada caso, se tomen las providencias necesarias por parte de las autoridades receptoras para la guarda y conservación de los certificados y valores.

Artículo 139. El Comité Técnico dispondrá de los recursos necesarios para otorgar estímulos económicos a los servidores públicos del Poder Judicial, en los términos que señalen las normas aplicables.

Artículo 140. La aplicación de recursos del Fondo para fines de retiro para el personal del Poder Judicial será determinada por el Comité Técnico, siempre y cuando exista viabilidad financiera y conforme a las bases siguientes:

I. Los fondos de retiro de servidores públicos del Poder Judicial, a cuya constitución, incremento o apoyo se destinen los recursos, tengan carácter general y abarquen a una o varias categorías de personal; y

II. Los recursos del fondo de retiro objeto de constitución, incremento o apoyo no se utilicen en forma alguna para la realización de préstamos de cualquier índole.

Artículo 141. El Comité Técnico, para disponer de recursos que se destinarán al retiro de servidores públicos del Poder Judicial, atenderá las bases que al efecto establezca el Consejo de la Judicatura, conforme con los principios siguientes:

I. El servidor público jubilado o el incapacitado en forma permanente total, con más de quince años de servicio en el Poder Judicial, recibirá el correspondiente beneficio por el término de diez años, contado a partir de la fecha en que surta efectos su jubilación o aparezca la incapacidad. El fallecimiento del jubilado o del incapacitado extinguirá tal beneficio;

II. El beneficio de que se trata se ajustará en forma trimestral, conforme a los recursos existentes en el fondo para el retiro, pero en ningún caso podrá ser menor del diez por ciento ni superior al cincuenta por ciento mensual del importe de la pensión que, como ex trabajador del Poder Judicial, perciba cada jubilado o incapacitado; y

III. El Comité Técnico reconstituirá o incrementará el fondo de retiro con las aportaciones anuales que al efecto autorice el Pleno del Consejo, tomando en consideración los recursos propios existentes y la viabilidad financiera del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.

Artículo 142. Dentro de los primeros sesenta días de cada año, el Comité Técnico obtendrá estados financieros dictaminados por el contador público o despacho de contadores públicos, en los términos de las leyes fiscales respectivas, con relación a la auditoría externa que se haya realizado al Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia.

Artículo 143. Los bienes muebles o inmuebles que, de conformidad con lo dispuesto por las leyes de la materia, sean adquiridos por la institución fiduciaria en ejecución del fideicomiso y, en General, aquellos otros para cuya compra se destinen recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia acrecentarán el patrimonio de éste y quedarán sujetos a las normas que regulen el régimen patrimonial del mismo.

Artículo 144. Los bienes que integren el Fondo, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y demás normativa aplicable, sólo podrán destinarse a los fines siguientes:

I. Adquirir, construir, mantener o remodelar inmuebles para el establecimiento o ampliación de oficinas judiciales;

II. Arrendar inmuebles para el establecimiento o ampliación de las oficinas de las Salas de los Tribunales, del Consejo de la Judicatura y de los Juzgados;

III. Comprar, rentar, reparar o mantener el mobiliario y el equipo necesario para el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial;

IV. Desarrollar programas y acciones de capacitación, actualización y superación profesional del personal del Poder Judicial;

V. Otorgar estímulos económicos a los servidores públicos del Poder Judicial, con motivo del desempeño relevante de sus funciones, de acuerdo con la normativa aplicable;

VI. Constituir, incrementar y apoyar fondos de retiro para los servidores públicos del Poder Judicial, así como otras prestaciones que autorice el Consejo de la Judicatura a favor de aquéllos;

VII. Sufragar gastos que sean necesarios y justificados para el mejoramiento de la administración de justicia;

VIII. Cubrir los honorarios fiduciarios y los demás gastos que originen la administración y operación del Fondo;

IX. Sufragar cualquier eventualidad que no estuviere considerada en el presupuesto de egresos;

X. Cubrir el pago de pólizas de seguros de vida o incapacidad total permanente; y

XI. Los demás que el Consejo de la Judicatura estime convenientes para el mejoramiento de la impartición de justicia.

SECCIÓN OCTAVA

De los Centros de Convivencia Familiar

Artículo 145. Los órganos jurisdiccionales que conozcan de la materia familiar se auxiliarán de los Centros de Convivencia Familiar que para tal efecto integre el Consejo de la Judicatura.

Artículo 146. Los Centros de Convivencia Familiar tendrán como finalidad facilitar la convivencia paterno-filial en los casos en que, a juicio de los titulares de los órganos jurisdiccionales, no pueda ésta realizarse de manera libre o se ponga en peligro el interés superior del menor.

Artículo 147. Los servicios que brinden los Centros serán proporcionados de forma gratuita, en los espacios que para tal efecto designe el Consejo de la Judicatura.

Artículo 148. Cada Centro estará a cargo de un director y del personal necesario para el cumplimiento de sus funciones, conforme al Reglamento que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura y en el cual se establecerán las bases de organización y funcionamiento.

Artículo 149. Para ser director de un Centro de Convivencia Familiar se requiere:

I. Ser veracruzano y haber residido en la entidad durante los dos años anteriores al día de la designación; o mexicano por nacimiento con vecindad mínima de cinco años en el Estado; en ambos casos, ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de la designación;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente su buena fama, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución Federal y la Ley de la materia; y

V. Poseer título con antigüedad de cinco años a nivel licenciatura con especialidad en menores o relaciones familiares, preferentemente en cualesquiera de las ramas siguientes: Derecho, Psicología o Trabajo Social; y acreditar la experiencia y capacidad indispensables para el desempeño del cargo.

SECCIÓN NOVENA

De la Contraloría del Poder Judicial

Artículo 150. La Contraloría del Poder Judicial es el órgano encargado de la función de control e inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo que rijan a los órganos y servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de aquellas que correspondan al Pleno del Consejo de la Judicatura o al Tribunal Superior de Justicia.

Estará a cargo de un contralor, quien será nombrado y removido por el Consejo de la Judicatura, y sus atribuciones se establecerán en el Reglamento Interior.

La Contraloría contará con personal del perfil adecuado para el cumplimiento de su función.

Artículo 151. El contralor deberá ser mexicano, en ejercicio de sus derechos; tener título de licenciado en Derecho, Contaduría Pública, Administración o Economía, y cédula profesional expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello; ser mayor de treinta y cinco años de edad; de reconocida buena conducta, y contar, cuando menos, con cinco años de experiencia profesional.

Artículo 152. La Contraloría del Poder Judicial contará con las atribuciones siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de control establecidas por el Consejo de la Judicatura;

II. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órganos administrativos, de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;

III. Tener a su cargo el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial, así como instaurar los procedimientos correspondientes por el incumplimiento o falsedad en su presentación, debiendo dar cuenta al Consejo de la Judicatura en los términos previstos en la normativa;

IV. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y contabilidad; y

V. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales correspondientes.

Artículo 153. El Reglamento Interior de la Contraloría establecerá la organización y funcionamiento de ésta y los requisitos que deberán cubrir sus servidores públicos.

SECCIÓN DÉCIMA

Dirección de Asuntos Jurídicos

Artículo 154. La Dirección de Asuntos Jurídicos es el área de consulta, asesoría y representación legal del Poder Judicial del Estado; estará directamente subordinada al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado.

Artículo 155. La Dirección de Asuntos Jurídicos se integrará con un director, dos Jefaturas de Departamento, el Consultivo y el Contencioso así como el personal jurídico y administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 156. Para ser titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial se requiere:

- I. Contar como mínimo, con título profesional y cedula de Licenciatura en Derecho;
- II. Contar cuando menos con cinco años de experiencia en la materia; y
- III. No haber sido condenado por ningún delito o sancionado por responsabilidad administrativa. Los mismos requisitos serán exigibles para ocupar el puesto de jefe de Departamento Consultivo y Contencioso.

Artículo 157. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Poder Judicial del Estado, tendrá las siguientes funciones:

- I. Coadyuvar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el ejercicio de la representación legal del Poder Judicial del Estado de Veracruz;
- II. Atender y dar respuesta a las consultas que le sean presentadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, sobre cuestiones jurídicas surgidas de la relación entre el Poder Judicial del Estado y otras instituciones de gobierno;
- III. Brindar servicios de asesoría jurídica en general a todos los órganos del Poder Judicial del Estado de Veracruz;
- IV. Elaborar, revisar y someter a consideración del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, los proyectos de reglamentos interiores y demás dispositivos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Veracruz;
- V. Preparar y revisar los proyectos de los diversos acuerdos y lineamientos que deban ser expedidos por los órganos del Poder Judicial del Estado de Veracruz;
- VI. Participar en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, así como en el Subcomité de Adquisiciones;
- VII. Tener acceso, en los términos de la normatividad aplicable, mediante el personal que designe su titular, al sistema integral de información de los órganos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con el fin de dar contestación a los requerimientos realizados por mandato de juez competente, así como los que

tengan relación con la sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores y/o derivados de investigaciones ministeriales;

VIII. Brindar servicios de asistencia y orientación en materia jurídico-laboral a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, en los que pueda comprometerse el interés institucional;

IX. Opinar en asuntos relacionados con procedimientos del servicio civil de carrera del Poder Judicial que involucren al personal de los órganos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a fin de preservar o dar certeza a los intereses del mismo;

X. Revisar, y validar los contratos de arrendamiento, prestación de servicios, obra pública y demás convenios en los que tenga injerencia el Poder Judicial del Estado;

XI. Representar y llevar a cabo la defensa institucional, en todos los procedimientos en los que el Poder Judicial del Estado de Veracruz, sea parte;

XII. Desarrollar todas las funciones que sean necesarias en los asuntos de su competencia, y

XIII. Las demás que expresamente le sean conferidas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

Artículo 158. Al Departamento Consultivo, corresponderán las siguientes funciones:

I. Atender y dar respuesta a las consultas que le sean presentadas al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, sobre cuestiones jurídicas surgidas de la relación entre el Poder Judicial del Estado y otras instituciones de gobierno;

II. Brindar servicios de asesoría jurídica en general a todos los órganos del Poder Judicial del Estado de Veracruz;

III. Elaborar, revisar y someter a consideración del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, los proyectos de reglamentos interiores y demás dispositivos jurídicos necesarios para el buen funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Veracruz;

IV. Preparar y revisar los proyectos de los diversos acuerdos y lineamientos que deban ser expedidos por los órganos del Poder Judicial del Estado de Veracruz;

V. Participar con el carácter de vocal jurídico en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas, así como en el Subcomité de Adquisiciones;

VI. Revisar y validar los contratos de arrendamiento, prestación de servicios, obra pública y demás convenios en los que tenga injerencia el Poder Judicial del Estado;

VII. Realizar los trámites tendientes a la regularización de la propiedad inmobiliaria del Poder Judicial del Estado de Veracruz; y

VIII. Coadyuvar en la administración del Fideicomiso de Pensiones Complementarias y haber de Retiro para los magistrados del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Artículo 159. Al Departamento de lo Contencioso tendrá las siguientes funciones:

I. Representar y llevar a cabo la defensa institucional, ante los Tribunales federales o estatales en todos los procedimientos en los que el Poder Judicial del Estado sea parte, en las materias laboral, penal, civil, administrativos y de amparo;

II. Elaborar los proyectos de informes que sean requeridos por las autoridades federales y locales, derivados de los procedimientos en que los órganos del Poder Judicial del Estado de Veracruz, sean parte;

III. Proponer criterios para la revisión de los contratos que regirán las relaciones laborales del personal de base y de contrato del Poder Judicial del Estado;

IV. Asesorar a la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura, cuando así lo solicite en los procedimientos de aplicación de sanciones a los servidores públicos por incumplimiento a sus obligaciones en materia laboral, con base en las Condiciones Generales de Trabajo;

V. Solicitar a la Dirección General de Administración del Consejo de la Judicatura, el cálculo de cantidades que legalmente procedan a fin de efectuar el pago de liquidaciones de los servidores del Poder Judicial, derivada de las negociaciones conciliatorias o de la resolución de conflictos o procedimientos de carácter laboral;

VI. Designar a los abogados de su adscripción con el carácter de autorizados para oír y recibir notificaciones en su nombre y representación, en los juicios y procedimientos en que intervenga;

VII. Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes técnicos relacionados con los asuntos de su competencia;

VIII. Desarrollar todas las funciones que sean necesarias en los asuntos de su competencia; y

IX. Las demás que expresamente le sean conferidas por el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

TÍTULO CUARTO

DEL CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA DE VERACRUZ

Artículo 160. El Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz es el órgano del Poder Judicial encargado de aplicar los medios alternativos de solución de controversias en los términos de las disposiciones legales aplicables. Su estructura y funcionamiento se regirán conforme a la ley de la materia.

TÍTULO QUINTO

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

CAPÍTULO I

DE LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD

Artículo 161. Los servidores públicos del Poder Judicial deberán ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en esta Ley y demás ordenamientos aplicables, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.

Artículo 162. Los magistrados y los integrantes del Consejo de la Judicatura sólo podrán ser removidos de conformidad con lo dispuesto por el Título Quinto de la Constitución Política del Estado y la legislación aplicable.

Artículo 163. Los magistrados y jueces, además de lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado, incurrirán en responsabilidad administrativa cuando:

- I. Admitan demandas o promociones de quien no acredite su personalidad conforme a la ley, o desechen, por esa deficiencia, unas y otras de quienes las hubiesen acreditado debidamente;
- II. Admitan fianzas y contrafianzas en los casos que prescriban las leyes, de personas que no acrediten suficientemente su solvencia y la libertad de gravámenes de los bienes que sirvan para ello;
- III. No presidan las audiencias de recepción de pruebas y las juntas y demás diligencias en las que la ley determine su intervención;

IV. No concurren, sin causa justificada, al desempeño de sus labores oficiales durante las horas reglamentarias, o dentro de su horario de trabajo se ausenten sin causa justificada;

V. No muestren a las partes, sin causa justificada, cuando lo soliciten, los expedientes;

VI. No dicten resolución dentro de los términos de ley, sin que exista un motivo de justificación;

VII. No expresen el concepto y el fundamento legal de las excusas;

VIII. Se ausenten de sus labores por más de diez días consecutivos, sin un motivo de justificación;

IX. No concurren los magistrados a sus sesiones o plenos, así como cuando los desintegren, sin causa justificada;

X. Emitan resoluciones contrarias a las constancias procesales o al texto expreso de la ley; y

XI. Las demás que señale el Reglamento Interior.

Artículo 164. Los servidores públicos del Poder Judicial tendrán las siguientes obligaciones, cuya inobservancia será causa de responsabilidad:

I. Cumplir el servicio que les sea encomendado;

II. Concurrir puntualmente al desempeño de sus labores;

III. Preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función Judicial;

IV. No prejuzgar públicamente respecto de asuntos de su conocimiento;

V. Permanecer en la residencia del Tribunal o Juzgado al que estén adscritos, salvo que cuenten con permiso para ausentarse temporalmente;

VI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;

VII. Enviar oportunamente las ejecutorias a los Juzgados correspondientes;

VIII. Remitir al archivo los expedientes, en los términos de ley;

IX. No realizar conductas que atenten contra la independencia de la función judicial, como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona del mismo u otro Poder;

X. No inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial;

XI. Permitir o facilitar, en los procedimientos judiciales, que las partes ejerzan los derechos que legalmente les correspondan;

XII. Abstenerse de realizar nombramientos, promociones o ratificaciones en contravención a las disposiciones correspondientes;

XIII. Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que estén destinados;

XIV. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tengan conferidas y coadyuvar en el sistema de transparencia pública, proporcionando la documentación e información que les sea requerida al efecto, en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;

XV. Custodiar la documentación e información que tengan bajo su responsabilidad, e impedir su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

XVI. Observar buena conducta en su desempeño, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tengan relación con motivo del desempeño de su función;

XVII. Comunicar por escrito, al titular de la dependencia o Juzgado en que presten sus servicios, las dudas fundadas que les suscite la procedencia de las órdenes que reciban y que pudieren implicar violaciones a la ley o a cualquier otra disposición administrativa, a efecto de que el titular dicte las medidas que en derecho procedan, las cuales deberán ser notificadas al servidor público que emitió la observación;

XVIII. Abstenerse de ejercer funciones cuando ha concluido el período para el que fueron nombrados, por haber sido cesados o por cualquier otra causa legal que se los impida;

XIX. Abstenerse de otorgar a sus subordinados, fuera de los casos previstos por la Ley, licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo u otras percepciones;

XX. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge

o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que los servidores públicos o las personas antes referidas formen o hubiesen formado parte. La excusa deberá tramitarse en los términos que señalen la ley o el reglamento respectivo;

XXI. Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción anterior, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate y que implique conflicto de intereses que afecte su desempeño imparcial;

XXII. Realizar con diligencia las certificaciones, emplazamientos, embargos o notificaciones de cualquier clase que les fueren encomendadas;

XXIII. Llevar a cabo las diligencias en el lugar señalado en autos;

XXIV. Practicar los embargos, aseguramientos o retención de bienes o lanzamientos de personas o corporaciones, precisamente en los términos del auto respectivo;

XXV. Rendir los informes que les sean requeridos por sus superiores jerárquicos;

XXVI. Denunciar por escrito, ante el Consejo de la Judicatura, los actos u omisiones que llegaren a advertir respecto de cualquier servidor público y que pudieren constituir responsabilidad administrativa en los términos de las disposiciones aplicables; y

XXVII. Las demás que determine la normativa aplicable.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 165. El procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial a que se refiere este Título se iniciará de oficio o por denuncia presentada por persona interesada.

Artículo 166. Tratándose de investigaciones oficiosas, el Consejo de la Judicatura instruirá a los magistrados visitadores, al titular de la Contraloría o, en su caso, a alguno de los consejeros a realizar la investigación correspondiente y a rendir el informe respectivo. La investigación no podrá exceder de seis meses.

De existir elementos sobre la probable responsabilidad del servidor público, el informe hará las veces de denuncia, debiéndose especificar tanto la identidad del probables responsables (sic) como también la causa de responsabilidad, tras lo cual se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

Tratándose de procedimientos iniciados por denuncia, el término para interponerla no será mayor a noventa días naturales, a partir de que se tenga conocimiento del probable acto de responsabilidad.

Artículo 167. La denuncia por alguna falta imputable a los servidores públicos del Poder Judicial se sujetará a las formalidades siguientes:

I. Se presentará ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia o el Consejo del (sic) Judicatura, según corresponda;

II. Se ofrecerán y adjuntarán los medios de prueba con los que se trate de demostrar la existencia de la conducta denunciada; y

III. Deberá ratificarse ante la secretaría de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia o del Consejo de la Judicatura, según corresponda, o ante el órgano que este último designe, dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación.

Si la denuncia no cumpliera con alguna de las formalidades a que se refiere este artículo o se tratara de cuestiones de naturaleza jurisdiccional, se desechará de plano, lo que se notificará personalmente al denunciante.

Artículo 168. Si el informe o la denuncia cumplen con los requisitos exigidos en la presente Ley, el Consejo procederá a incoar el procedimiento administrativo sancionador de la manera siguiente:

I. Citará al servidor público denunciado a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los veinte días hábiles posteriores a la radicación del procedimiento respectivo, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad.

En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se imputen al servidor público y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor; y para el caso de que no quiera o pueda realizar tal designación, le será asignado un defensor de oficio.

En caso de que así lo solicite el servidor público, podrá presentar la contestación a la denuncia por escrito, siempre y cuando el mismo sea recibido por el Consejo de la Judicatura antes de la fecha señalada para la práctica de la audiencia respectiva,

ya sea que dicho recurso sea presentado de manera directa o a través de correo certificado.

Practicada la notificación, si el servidor público deja de comparecer a la audiencia sin causa justificada o no es recibido su escrito de contestación dentro del término señalado anteriormente, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan.

La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al servidor público denunciado. Para lograr este propósito, el Consejo de la Judicatura podrá ordenar que la práctica de la misma sea realizada por el órgano que éste designe, pudiendo usar cualquier medio de comunicación idóneo para hacer cumplir su determinación.

El uso de los medios a que hace referencia este artículo deberá asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la de la diligencia ordenada.

Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco días hábiles;

II. Concluida la audiencia, se concederá al servidor público denunciado un plazo de tres días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen; el Consejo admitirá las pruebas que tengan relación con los hechos denunciados y ordenará su desahogo.

Serán admisibles todas las pruebas, excepto la de posiciones y las que sean contrarias a la moral y al derecho. Las pruebas que se ofrezcan en el escrito de queja o informe del denunciado deberán desahogarse dentro del plazo de quince días hábiles, contado a partir de la fecha de admisión.

En relación a la prueba testimonial, deberá exhibirse el interrogatorio respectivo y copias necesarias para correr traslado a la contraparte, a fin de que formule preguntas dentro del término de tres días; si se tratare de la prueba pericial, propondrá a su perito precisando los puntos sobre los que versará la misma. Si no se reúnen los requisitos anteriores serán desechadas.

La admisión, desahogo, recepción y valoración de las pruebas, se sujetarán a las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado, siempre y cuando no se contrapongan a la presente Ley;

III. Desahogadas las pruebas que fueren admitidas, el Consejo resolverá dentro de los diez días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

El Consejo podrá duplicar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades;

IV. Durante la sustanciación del procedimiento, el Consejo de la Judicatura podrá practicar todas las diligencias tendientes a investigar la responsabilidad del servidor público denunciado, así como requerir a éste y a las dependencias o entidades involucradas la información y documentación que se relacionen con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.

Si el Consejo de la Judicatura encontrare que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advirtiere datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del servidor público denunciado o de otros servidores públicos, podrá disponer la práctica de otras diligencias para mejor proveer o, en su caso, diferir por única ocasión la audiencia, en un término que no excederá de veinte días hábiles; y

V. Previa o posteriormente al citatorio al servidor público denunciado, el Consejo podrá determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá a partir del día siguiente al momento en que sea notificada al interesado.

La suspensión cesará cuando así lo resuelva el Consejo de la Judicatura, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.

En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirá en el goce de sus derechos y le cubrirá las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se encontró suspendido.

Artículo 169. Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella; si se negaren a hacerlo, se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad.

Artículo 170. De ser fundada la denuncia, se procederá a imponer las sanciones correspondientes.

(REFORMADO, G.O. 4 DE FEBRERO DE 2020)

Cuando la queja resulte infundada, por haberse conducido con temeridad, mala fe, sin causa justificada, o sin prueba, se impondrá a los promoventes una multa hasta por el equivalente al valor diario de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, que se hará efectiva a través de la Oficina de Hacienda del Estado, sin perjuicio de que, de estimarse pertinente, se dé vista con lo actuado al Fiscal, para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 171. Tratándose del Tribunal Superior de Justicia, para los efectos de la imposición de las sanciones disciplinarias, se observará el procedimiento siguiente:

I. Cuando se trate del personal del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de éste, previa audiencia del acusado acorde con el procedimiento previsto en los artículos 175 y 176 de esta Ley, dictará su resolución y, en su caso, impondrá la sanción respectiva; y

II. Cuando se trate de magistrados o consejeros, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en lo conducente, recibirá la queja correspondiente y dará cuenta al Pleno del Tribunal para iniciar el procedimiento respectivo, en el cual deberá garantizarse las formalidades esenciales de todo procedimiento. La discusión y resolución del caso se hará en sesión pública y mediante votación secreta; de ser procedente, la sanción se decidirá por mayoría de votos.

Artículo 172. Para la imposición de las sanciones se tomará en cuenta los elementos siguientes:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la ley o las que se dicten con base en ella;

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público, teniendo como base lo declarado ante la Contraloría del Poder Judicial;

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la ley, se considerará reincidente al servidor público que, habiendo sido declarado responsable en un procedimiento administrativo sancionador, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras previstas en esta Ley.

Artículo 173. Las sanciones aplicables a las faltas previstas en el presente Título consistirán en:

I. Apercibimiento privado o público;

II. Amonestación privada o pública;

III. Sanción económica;

IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor a tres días ni mayor a un año;

V. Destitución del puesto; o

VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Artículo 174. Si el servidor público denunciado confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia esta Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conozca del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión, en cuyo caso el Consejo o el presidente del Tribunal Superior de Justicia o el Pleno de éste valorará la sanción a imponer, atenuándola según los criterios señalados en el artículo 172 de esta Ley.

Artículo 175. Las facultades del Consejo de la Judicatura para imponer las sanciones que señala esta Ley prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al en que se hubiesen cometido las infracciones o a partir del momento en que hubiese cesado, si fueran de carácter continuo. La prescripción se interrumpirá al iniciarse el procedimiento previsto en esta Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción.

Artículo 176. Procede el sobreseimiento cuando:

I. Habiendo sido admitida la denuncia aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia señaladas en la ley; o

II. El denunciado fallezca.

Artículo 177. Para sancionar a los servidores públicos que no son considerados por esta Ley como de confianza, se estará a lo dispuesto a la Ley Estatal del Servicio Civil, con excepción de aquellos casos donde no pueda dividirse la continencia de la causa.

TÍTULO SEXTO

PREVENCIONES GENERALES

Artículo 178. Los Tribunales y los jueces deberán ordenar la ejecución de las sentencias y demás resoluciones que pronuncien y causen estado.

Cuando sea necesario el auxilio de la fuerza pública, lo solicitarán directamente, por escrito, a quienes tengan el mando de la misma.

Será causa de responsabilidad para quienes tengan el mando de la fuerza pública no proporcionar oportunamente el auxilio requerido.

Artículo 179. En las cabeceras de distritos judiciales, las visitas a las cárceles se practicarán por el juez de ejecución del Juzgado de proceso y procedimiento penal competente, esto de manera mensual, sin perjuicio de las extraordinarias que estimen convenientes y cuando lo ordene la superioridad, levantando el acta circunstanciada correspondiente.

Artículo 180. Fuera de la práctica de visitas o diligencias oficiales a que se refiere esta Ley, los jueces no podrán abandonar el lugar de su adscripción sin la previa autorización del Consejo de la Judicatura, el cual impondrá las correcciones disciplinarias en caso de infracción, salvo que se trate de practicar diligencias urgentes y necesarias para resolver el término a que se refiere el artículo 19 de la Constitución General de la República.

Artículo 181. Las copias o fotocopias certificadas que se pidieren por los interesados en los asuntos judiciales deberán expedirse si lo permite el estado de dichos asuntos, siempre que las diligencias no tengan el carácter de reservadas, sin que sea permitido a los empleados hacer cobro alguno por la expedición de ellas. Los interesados podrán, si lo desean, utilizar los servicios de mecanógrafos particulares para las compulsas que hagan durante las horas ordinarias de labores. En ambos casos, el secretario hará compulsas de las constancias, las que autorizará sin estipendio alguno, bajo su responsabilidad y mediante el pago de los derechos fiscales que se causen.

Artículo 182. Ningún servidor público del Poder Judicial podrá ejercer la abogacía en forma independiente, ni ser apoderado judicial, tutor, curador, albacea o depositario judicial, sino en causa propia o en la de sus ascendientes, descendientes o cónyuge, ni ser corredor, síndico, administrador o interventor de concurso, árbitro o arbitrador.

Artículo 183. Cuando en ejercicio de sus funciones tuvieren que salir del lugar donde desempeñan sus actividades oficiales, los servidores públicos de la administración

de justicia tendrán derecho al pago de los gastos que eroguen por tal efecto, de conformidad con los manuales y lineamientos respectivos.

Artículo 184. El cambio de adscripción de los jueces de Primera Instancia y de secretario de esa categoría, a otros distritos judiciales, no interrumpirá la percepción de sus sueldos y demás prestaciones.

El Consejo de la Judicatura, en atención a la distancia y a los medios de comunicación, fijará un plazo para que los servidores públicos referidos se presenten a tomar posesión del nuevo encargo.

Artículo 185. Los particulares están obligados a guardar el debido respeto a los servidores públicos del Poder Judicial y, en todo caso, se dirigirán a ellos o se referirán a los mismos en sus quejas con todo comedimiento. La infracción de esta disposición será sancionada en los términos legales.

CAPÍTULO I

DIVISIÓN TERRITORIAL

Artículo 186. En cada uno de los distritos judiciales, el Consejo de la Judicatura establecerá, mediante Acuerdos Generales, el número de Juzgados y, en su caso, su especialización.

Artículo 187. El territorio del Estado se divide en los veintiún distritos judiciales siguientes, cuyas cabeceras serán los municipios citados en primer término:

I. Primero: Pánuco, Pueblo Viejo, Tampico Alto y El Higo;

II. Segundo: Ozuluama, Naranjos-Amatlan, Citlaltépetl, Chinampa de Gorostiza, Tamalín, Tantima y Tancoco;

III. Tercero: Tantoyuca, Chiconamel, Chalma, Chontla, Ixcatepec, Platón Sánchez y Tempoal;

IV. Cuarto: Huayacocotla, Zacualpan, Ilamatlán y Texcatepec;

V. Quinto: Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez, Tlachichilco y Zontecomatlán;

VI. Sexto: Tuxpan, Cerro Azul, Tamiahua, Álamo Temapache y Tepetzintla;

VII. Séptimo: Poza Rica de Hidalgo, Cazones de Herrera, Castillo de Teayo, Tihuatlán y Coatzintla;

VIII. Octavo: Papantla, Coahuilán, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Tecolutla y Zozocolco de Hidalgo;

IX. Noveno: Misantla, Colipa, Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Nautla, San Rafael, Tenochtitlán, Vega de Alatorre y Yecuatla;

X. Décimo: Jalacingo, Atzalan, Altotonga, Las Minas, Perote, Tlapacoyan y Villa Aldama;

XI. Décimo primero: Xalapa, congregación de Pacho Viejo del Municipio de Coatepec, Acajete, Acatlán, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Banderilla, Coacoatzintla, Chiconquiaco, Emiliano Zapata, Jilotepec, Landero y Coss, Las Vigas de Ramírez, Naolinco, Miahuatlán, Rafael Lucio, Tatatila, Tepetlán, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan y Tonayán;

XII. Décimo segundo: Coatepec, Apazapan, Ayahualulco, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, Jalcomulco, Teocelo y Xico;

XIII. Décimo tercero: Huatusco, Alpatláhuac, Calchahualco, Comapa, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Sochiapa, Tenampa, Tepatlaxco, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela, Totutla y Zentla;

XIV. Décimo cuarto: Córdoba, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, Coetzala, Cuichapa, Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Naranjal, Omealca, Paso del Macho, Tezonapa, Tomatlán, Yanga y la congregación Ayojapa del Municipio de Zongolica;

XV. Décimo quinto: Orizaba, Acultzingo, Aquila, Atzacan, Camerino Z. Mendoza, San Andrés Tenejapa, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Maltrata, Mariano Escobedo, Nogales, Rafael Delgado, Río Blanco, Soledad Atzompa y Tlilapan;

XVI. Décimo sexto: Zongolica, Atlahuilco, Astacinga, Los Reyes, Magdalena, Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tlaquilpa y Xoxocotla;

XVII. Décimo séptimo: Veracruz, Alvarado, La Antigua, Boca del Río, Cotaxtla, Medellín de Bravo, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Soledad de Doblado, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Ursulo Galván;

XVIII. Décimo octavo: Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo, Acula, Amatitlán, Chacaltianguis, Ixmatlahuacan, Otatitlán, José Azueta, Santiago Sochiapan, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tlacojalpan, Tres Valles, Tuxtilla y Playa Vicente;

XIX. Décimo noveno: San Andrés Tuxtla, Ángel R. Cabada, Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Santiago Tuxtla e Isla;

XX. Vigésimo: Acayucan, Mecayapan, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Sotepan, Texistepec, Jáltipan y Jesús Carranza; y

XXI. Vigésimo primero: Coatzacoalcos, Tatahuicapan de Juárez, Uxpanapa, Agua Dulce, Cosoleacaque, Chinameca, Las Choapas, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Oteapan, Pajapan y Zaragoza.

CAPÍTULO II

IMPEDIMENTOS

Artículo 188. Los magistrados, jueces y secretarios estarán impedidos de conocer, y en la obligación de excusarse, en los casos siguientes:

I. Tener parentesco en línea recta, sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad, hasta el cuarto grado, y en la colateral por afinidad, hasta el segundo grado, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;

II. Tener amistad íntima, compadrazgo o enemistad con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior;

III. Tener interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I;

IV. Haber presentado querrela o denuncia el funcionario, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, en contra de alguno de los interesados;

V. Tener pendiente el funcionario, su cónyuge o sus parientes, en los grados que expresa la fracción I, un juicio contra alguno de los interesados, o no haber transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del que hayan seguido, hasta aquella en que tome conocimiento del asunto;

VI. Tener pendiente de resolución un asunto semejante al de que se trate, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en los grados expresados en la fracción I;

VII. Seguir algún negocio en que sea juez, árbitro o arbitrador alguno de los interesados;

VIII. Asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diera o costeara alguno de los interesados; tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos;

- IX. Aceptar presentes o servicios de alguno de los interesados;
- X. Hacer promesas que impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores, o amenazar de cualquier modo a alguno de ellos;
- XI. Ser acreedor, deudor, socio, arrendador, arrendatario o dependiente de alguno de los interesados;
- XII. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los interesados o administrador de sus bienes por cualquier título;
- XIII. Ser heredero, legatario, donatario o fiador de alguno de los interesados, si el funcionario ha aceptado la herencia o el legado o ha hecho alguna manifestación en ese sentido;
- XIV. Ser el cónyuge o alguno de los hijos del funcionario, acreedor, deudor o fiador de alguno de los interesados;
- XV. Haber sido magistrado, juez o secretario en el mismo asunto en otra Instancia;
- XVI. Haber sido perito, testigo, apoderado, patrono o defensor, en el caso de que se trate;
- XVII. Haber formulado conclusiones o intervenido en una cuestión de fondo con el carácter de agente del Ministerio Público o fiscal en el asunto, si es penal, o haber gestionado o recomendado anteriormente el asunto, en favor o en contra de alguno de los interesados;
- XVIII. Haber sido procesado, el funcionario, su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la fracción I de este artículo, en virtud de querrela o denuncia presentada ante las autoridades, por alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores; y
- XIX. Los demás que señalen las leyes. Para los efectos de este artículo, se considerará como interesado en los asuntos del orden penal al inculcado o a la persona que tenga derecho a la reparación del daño.

Artículo 189. Las excusas y recusaciones se regirán por las disposiciones de los ordenamientos procesales respectivos.

CAPÍTULO III

DE LA PROTESTA CONSTITUCIONAL

Artículo 190. Los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los magistrados y de los que señala el párrafo siguiente, al iniciar el desempeño de sus cargos rendirán protesta formal de guardar y cumplir con la Constitución Federal, la Constitución del Estado y las leyes que de ellas emanen ante el titular del Consejo de la Judicatura o ante quien éste designe.

Los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia rendirán la protesta a que hace referencia el párrafo anterior ante el titular del órgano facultado, en términos de ley, para expedir el nombramiento respectivo.

CAPÍTULO IV

DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES

Artículo 191. Ningún servidor público podrá abandonar la residencia del Tribunal, Sala o Juzgado al que esté adscrito, ni dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo, sin que previamente se le hubiese otorgado la autorización respectiva con arreglo a la Ley. Cuando el personal de los Tribunales, Salas o Juzgados tuviere que abandonar su residencia para practicar diligencias, podrá hacerlo en casos urgentes cuando la ausencia no exceda de tres días, dando aviso al Consejo de la Judicatura, con expresión del objeto y naturaleza de la diligencia y fechas de salida y regreso.

CAPÍTULO V

DE LAS VACACIONES Y DÍAS INHÁBILES

Artículo 192. Los integrantes del Poder Judicial del Estado disfrutarán de dos períodos de vacaciones en el año, de quince días hábiles cada uno, los cuales fijará el Consejo de la Judicatura.

Artículo 193. En el Tribunal Superior de Justicia funcionará durante los dos períodos de vacaciones una Sala de Guardia, integrada por tres magistrados y un secretario, para el despacho de los asuntos urgentes, personal que será designado por el Pleno de dicho Tribunal y que posteriormente hará uso de sus vacaciones.

Los magistrados designados para integrar la Sala de Guardia sólo podrán excusarse de ello por causa de enfermedad, lo que resolverá el propio Pleno.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje dispondrá de igual forma sobre la guardia respectiva, que despachará los asuntos urgentes.

Se consideran asuntos urgentes los casos de desistimiento de la acción penal por parte del Fiscal, cuando haya detenido; los referidos a demandas de amparo y los que entrañen cumplimiento de ejecutorias en la misma materia que ordenen la libertad de alguna persona y los casos de alimentos, providencias precautorias, depósito de personas y libertad caucional. La Sala de Guardia tendrá facultades para interponer los recursos que sean procedentes conforme a la Ley de Amparo.

Artículo 194. Los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de las materias penal o familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno. En los recintos judiciales que conozcan de asuntos de familia, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar. Al reanudarse las labores, el secretario dará inmediata cuenta al juez de los asuntos urgentes que haya conocido para el efecto de su continuación procesal. El personal de guardia disfrutará de sus vacaciones en las fechas que fije el Consejo de la Judicatura.

En relación con los Juzgados de Procesos y Procedimientos Penales Orales, se quedará durante el período vacacional un juez encargado de la guardia con el personal que resulte indispensable para el cumplimiento de sus labores a fin de atender los asuntos de naturaleza urgente que se encuentran a su cargo y los de los demás jueces de la misma categoría y competencia, así como para cumplir las ejecutorias y proveídos emanados de las autoridades federales en materia de amparo.

(REFORMADO, G.O. 16 DE MARZO DE 2021)

Artículo 195. Las labores de los Juzgados en Materias Penal y Familiar, no se interrumpirán durante las vacaciones. En materia civil y laboral se suspenderán el trámite procesal y los términos judiciales hasta que se reanuden dichas labores, con observancia en lo dispuesto en la normatividad aplicable, en materia de términos judiciales.

Artículo 196. Son hábiles todos los días del año, excepto:

I. Los sábados y domingos; además, el primero de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del cinco de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del veintiuno de marzo; el primero y cinco de mayo; el quince y el dieciséis de septiembre; el doce y el veintiuno de octubre; el primero, el dos de noviembre, así como el tercer lunes de ese mismo mes, en conmemoración del veinte de noviembre; y el veinticinco de diciembre; sin embargo, tratándose de asuntos urgentes en materia penal conforme a esta Ley, serán hábiles los sábados para las Salas del Tribunal, y los sábados y domingos para los Juzgados de la materia, en términos de lo dispuesto por las leyes aplicables;

II. La fecha en que el titular del Poder Ejecutivo Estatal rinda la protesta de ley ante el Congreso del Estado; y

III. El primero de diciembre de cada seis años, en que tenga lugar la toma de protesta del titular del Poder Ejecutivo Federal.

El Consejo de la Judicatura podrá ordenar la suspensión de las labores en todas o algunas dependencias del Poder Judicial, en días distintos a los señalados, sin que pueda exceder de tres días continuos.

Artículo 197. Serán inhábiles los días en que se suspendan las labores en los supuestos a que se refiere el artículo anterior y no correrán los términos en materia civil, mercantil y administrativa.

Esta disposición no es aplicable a la materia penal, en donde se practicarán invariablemente las diligencias urgentes, con el personal de guardia que designe el juez o, en su caso, el secretario encargado por ministerio de ley que deberá habilitar a un empleado como secretario.

Artículo 198. Los Tribunales y Juzgados del Poder Judicial tendrán el cuidado de no señalar audiencias en asuntos civiles, mercantiles, administrativos y laborales en los días en los que, con anterioridad, se tenga noticia de la suspensión de labores.

Artículo 199. Son horas hábiles las comprendidas entre las siete y las diecinueve horas. Los magistrados y los jueces podrán habilitar los días y horas inhábiles conforme a los ordenamientos procesales respectivos. El horario de labores comprende de las ocho treinta a las catorce treinta horas.

CAPÍTULO VI

DE LAS LICENCIAS

Artículo 200. Todo servidor público del Poder Judicial que deba faltar temporalmente al ejercicio de sus funciones deberá contar con la licencia otorgada en los términos de esta Ley. En toda solicitud de licencia deberán expresarse por escrito las razones que la motivan.

Artículo 201. En ningún caso se podrá conceder licencias con el carácter de indefinidas, ni tampoco por un tiempo mayor de ciento veinte días naturales durante el período de un año, excepto cuando se trate de cursos de especialización en materia jurídica, cuya duración no exceda de seis meses.

Artículo 202. Toda licencia deberá concederse a través de un escrito en el que se hará constar la calificación de las razones aducidas en la solicitud respectiva. Salvo lo dispuesto en esta Ley, ningún funcionario podrá designar a la persona que lo sustituya en sus ausencias temporales.

Artículo 203. Las ausencias de los magistrados se tramitarán de la manera siguiente:

I. Tendrán derecho de ausentarse de sus funciones temporalmente, sin afectar sus percepciones económicas, hasta por cinco días consecutivos en cada ocasión. En este caso bastará que se comuniquen al presidente del Tribunal Superior de Justicia;

II. Cuando deban ausentarse hasta por un período de diez días, lo solicitarán por escrito al presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien turnará la solicitud al Pleno. En su caso, no podrá autorizarse un nuevo permiso en un término de seis meses;

III. Las que excedan de diez días pero no de ciento veinte serán autorizadas por el Congreso; y

IV. Podrán otorgarse licencias hasta por un plazo de un año para realizar, concluir o perfeccionar estudios, en cuyo caso, serán autorizadas por el Congreso.

Las ausencias a que se refieren las fracciones III y IV se concederán sin goce de sueldo.

Artículo 204. En sus ausencias o licencias temporales y para efectos de integrar Sala o Tribunal, los magistrados serán suplidos:

I. Si la falta no excediere de diez días, por el secretario de Acuerdos de la Sala respectiva, y a falta o imposibilidad de éste, por un secretario de Estudio y Cuenta de la propia Sala, en cuyo caso no se exigirá el requisito previsto por el artículo 58, fracción II, de la Constitución Política del Estado; y

II. Las que excedieren de diez días, por el magistrado que designe el Pleno del Tribunal, de entre aquellos que no integren algún órgano.

Artículo 205. Cuando la falta de un magistrado del Poder Judicial, de temporal se convirtiere en definitiva o concluya su encargo en términos de ley, se procederá de la manera siguiente:

I. El Tribunal o la Sala a que pertenezca lo hará del conocimiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia;

II. El presidente del Tribunal Superior de Justicia lo comunicará al Gobernador del Estado;

III. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, en términos de lo dispuesto por el artículo 59 de la Constitución Política local, hará la propuesta de magistrado al Congreso del Estado; y

IV. El Congreso del Estado, con base en lo dispuesto en el artículo 33, fracción XIX, de la Constitución Política local, hará el nombramiento del magistrado para cubrir la vacante, previa comparecencia de la persona propuesta ante la Junta de Coordinación Política, que verificará que reúna los requisitos para ser magistrado.

En los recesos del Congreso, la Diputación Permanente hará el nombramiento provisional, en tanto el Congreso se reúne y da la aprobación definitiva.

Artículo 206. El Consejo de la Judicatura será el encargado de otorgar licencias a los demás funcionarios y empleados del Poder Judicial.

CAPÍTULO VII

DEL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL

Artículo 207. En el Poder Judicial tendrán el carácter de servidores públicos de confianza los titulares de los órganos, los secretario de Acuerdos, los secretarios de Estudio y Cuenta, los secretarios de Sala, los actuarios, los administradores de causa judicial, los auxiliares de Sala, la persona o personas designadas por su presidente para auxiliarlo en las funciones administrativas o asistencia personal, los directores generales, los directores de área, subdirectores, jefes de departamento, asesores, cajeros, pagadores, los de seguridad y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios.

Artículo 208. Los servidores públicos del Poder Judicial no previstos en el artículo anterior y que sean considerados de base se regirán, en lo conducente, por la Ley Estatal del Servicio Civil.

CAPÍTULO VIII

DEL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE LOS MAGISTRADOS

Artículo 209. En un período no mayor a seis meses previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado el magistrado, el Consejo de la Judicatura analizará su actuación y desempeño, emitiendo como resultado un dictamen técnico, favorable o no favorable, respecto de su ratificación.

El dictamen técnico, así como el expediente del magistrado será enviado al Congreso del Estado para su estudio, en plazo no mayor a cuatro meses a partir de que se inició el procedimiento de ratificación.

Artículo 210. El dictamen referido contendrá como mínimo los siguientes apartados:

- I. Información estadística del número y tipo de asuntos atendidos;
- II. Estadística del tipo de recursos interpuestos ante la justicia federal en cuanto a sus resoluciones y sus resultados;
- III. Quejas administrativas interpuestas y las resoluciones de las mismas, en su caso;
- IV. Las actividades debidamente acreditadas, relacionadas con su empeño en la actualización constante para elevar sus conocimientos jurídicos;
- V. Las distinciones y reconocimientos que se haya hecho acreedor durante el desempeño de sus funciones;
- VI. Las comisiones que le fueron encomendadas y el cumplimiento de las mismas en beneficio de la administración e impartición de justicia; y
- VII. Faltas injustificadas;

El interesado podrá entregar una autoevaluación por escrito, expresando las razones por las cuales considera ser merecedor a la ratificación, la que se agregará al dictamen siempre que sea presentada por lo menos un mes antes de la fecha en que se deba remitir el dictamen correspondiente al Congreso del Estado.

Artículo 211. El magistrado que finaliza el primer período en el cargo, goza de presunción de aptitud para la ratificación.

El candidato a ratificación no tendrá la obligación de demostrar que es idóneo, pues al no haber sido cesado y llegar al final de su encargo se presume como apto.

Bastará con que no existan motivos que demeriten la actuación del magistrado para poder pronunciar un dictamen favorable.

El Consejo de la Judicatura deberá exponer, en caso de que se emita un dictamen no favorable, las razones por las cuales el magistrado no debe ser ratificado para un segundo período.

Se deberá entender por motivo expreso las faltas graves al desempeño de su encargo y que se encuentran previstas en las leyes aplicables.

Artículo 212. En caso de un dictamen técnico no favorable, el magistrado a ratificar podrá interponer el recurso de reclamación. Será por escrito, con expresión de agravios dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del dictamen recurrido. Se resolverá sin mayor trámite en tres días.

Artículo 213. El dictamen técnico no limita la facultad soberana del Congreso del Estado, de ratificar o no ratificar a los magistrados del Poder Judicial del Estado; sin embargo, de no emitir pronunciamiento sobre el dictamen correspondiente dentro de los treinta días siguientes a su recepción, se entenderá por ratificado el magistrado en cuestión.

TRANSITORIOS

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo segundo. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente Decreto.

Artículo tercero. La fracción XXII del artículo 17 se aplicará únicamente a los magistrados que sean nombrados después de la entrada en vigor de este Decreto. Los magistrados que hayan sido nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, computarán su retiro bajo los términos de la Ley anterior.

Artículo cuarto. La desaparición de los Juzgados Menores se realizará de forma paulatina de acuerdo con las necesidades del servicio y previo acuerdo del Consejo de la Judicatura. Los servidores públicos y trabajadores que integren los Juzgados Menores, quedarán a disposición del Consejo de la Judicatura, y serán readscritos de acuerdo a las necesidades del servicio, con pleno respeto a sus derechos laborales. Los órganos jurisdiccionales de esta naturaleza que continúen fungiendo a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, lo harán para su organización y funcionamiento en los términos que establece la Ley anterior.

Artículo quinto. El Consejo de la Judicatura realizara las adecuaciones pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 130 de la presente Ley.

Artículo sexto. Los procedimientos administrativos sancionadores que hayan sido radicados antes de la entrada en vigor de la presente Ley continuaran hasta su culminación con las disposiciones establecidas por la Ley anterior.

Artículo séptimo. La Legislatura del Estado, dentro de los 120 días naturales a la entrada en vigor de la presente Ley, deberá adecuar los ordenamientos legales necesarios para la armonización de la misma.

Artículo octavo. El Poder Judicial del Estado, dentro de los 90 días naturales a la entrada en vigor (sic) la presente Ley, deberá elaborar los reglamentos necesarios para la correcta aplicación de la misma.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

María Elisa Manterola Sainz
Diputada presidenta
Rúbrica.

Ángel Armando López Contreras
Diputado secretario
Rúbrica.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49 fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumplimiento del oficio SG/00000076 de los diputados presidenta y secretario de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimiento.

Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los seis días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
Miguel Ángel Yunes Linares
Gobernador del Estado
Rúbrica.

[N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS AL PRESENTE ORDENAMIENTO.]

G.O. 3 DE OCTUBRE DE 2018.

[N. DE E. TRANSITORIOS DEL “DECRETO NÚMERO 714 QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXII DEL ARTÍCULO 17 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 59; Y LA FRACCIÓN XXXVIII DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”.]

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano de Gobierno del Estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

G.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2018.

[N. DE E. TRANSITORIOS DEL “DECRETO NÚMERO 785 QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN MATERIA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL”.]

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

G.O. 20 DE MARZO DE 2019.

[N. DE E. TRANSITORIOS DEL “DECRETO 239 QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 60 DEL CÓDIGO DE DERECHOS; LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL; ADICIONA EL ARTÍCULO 652 BIS AL CÓDIGO CIVIL; Y DEROGA LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS, TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE”.]

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

G.O. 4 DE FEBRERO DE 2020.

[N. DE E. TRANSITORIOS DEL “DECRETO NÚMERO 532 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LEYES DEL ESTADO DE VERACRUZ”.]

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEGUNDO. Para los efectos legales procedentes, todas las leyes, decretos, códigos u ordenamientos estatales de observancia general, vigentes al momento de

la entrada en vigor del presente Decreto y que en su denominación contengan la expresión " ... salario mínimo", se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización que deberá ser utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

TERCERO. Las obligaciones y supuestos denominados en Unidad de Medida y Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en la citada unidad, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

G.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

[N. DE E. TRANSITORIOS DEL "DECRETO NÚMERO 582 QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL Y EL CÓDIGO PENAL; ORDENAMIENTOS TODOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO".]

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

G.O. 16 DE MARZO DE 2021.

[N. DE E. TRANSITORIOS DEL "DECRETO NÚMERO 847 QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN MATERIA DE CREACIÓN DE JUZGADOS LABORALES".]

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, Órgano de Gobierno del Estado.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Tercero. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado realizará las adaptaciones necesarias al marco jurídico administrativo y expedirá en el ámbito de su competencia, todas aquellas medidas necesarias, para dar cumplimiento al presente Decreto, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo Cuarto. Una vez entrado en vigor el presente Decreto, el Poder Judicial del Estado realizará las adecuaciones presupuestarias propias tendentes a la implementación del presente Decreto, y en su caso las gestiones necesarias a efecto de contar con los recursos que requiera para tal efecto con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo Quinto. En términos de lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Decreto 531 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado en materia de implementación a nivel local de la Reforma Federal al Sistema de Justicia Laboral, publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 4 de febrero de 2020, los Juzgados en Materia Laboral iniciarán sus funciones en la fecha que disponga la declaratoria que para el caso emita el Honorable Congreso del Estado.

Artículo Sexto. Los procedimientos jurisdiccionales competencia de los juzgados en materia laboral que se encuentren en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz y sus Juntas Especiales concluirán en los términos establecidos por los Decretos expedidos por el Honorable Congreso de la Unión publicados en el Diario Oficial de la Federación en fechas 24 de febrero de 2017 y 1 de mayo de 2019, así como el diverso expedido por el Honorable Congreso del Estado publicado en la Gaceta Oficial del Estado en fecha 4 de febrero de 2020.